

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



MEXICO

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

PRIMERA OFICINA DE TRAMITE

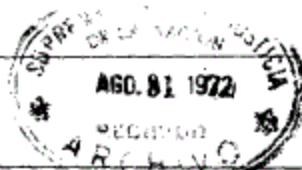
Año de iniciación 1967 Núm. 7319

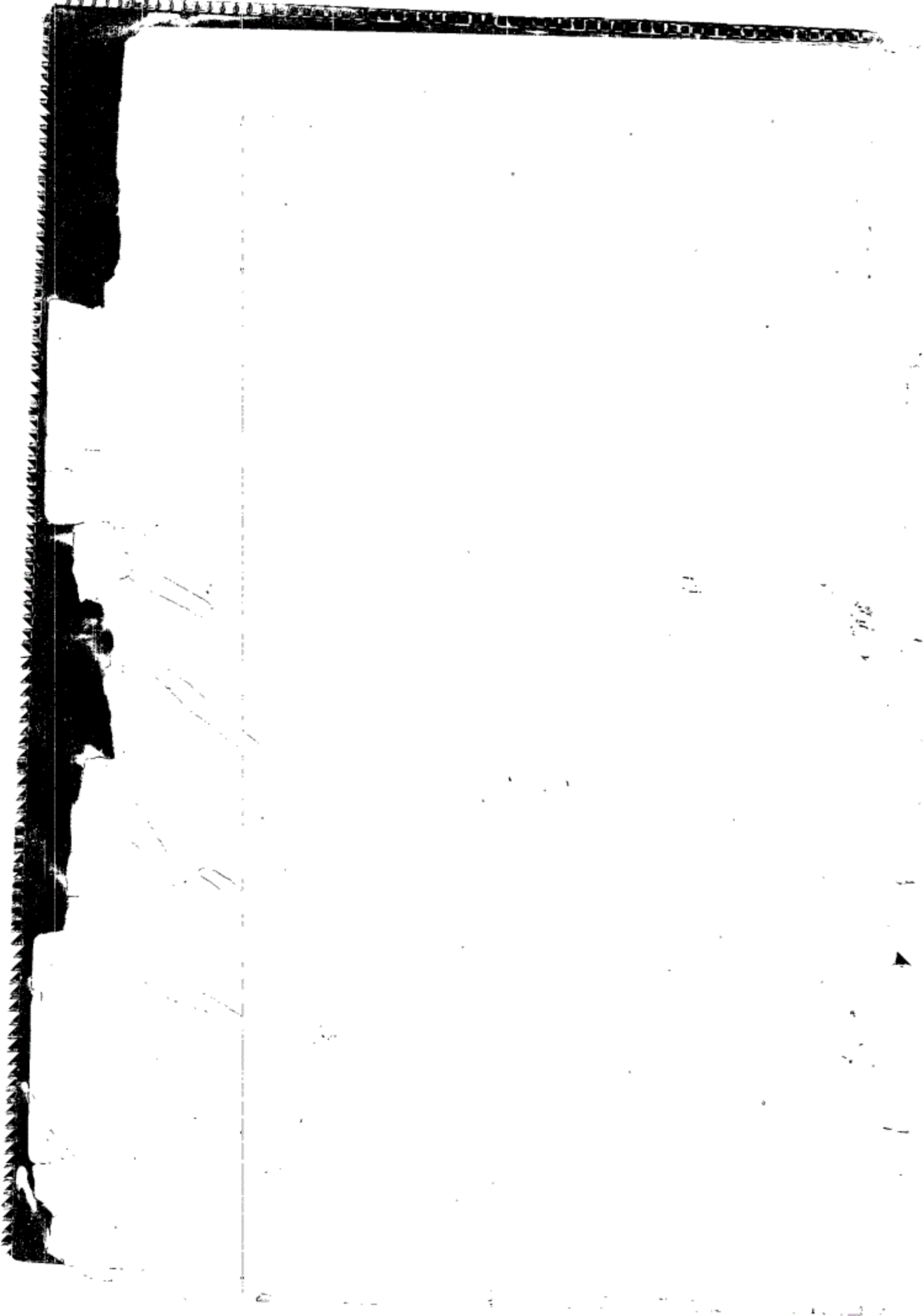
Toca al Amparo en Revisión

PRINCIPAL

Promovido por Lino Flores Meraz y Coagds.Contra actos de Congreso del Edo. y Otras Autds.Ante el Juez de Distrito de 1º CDMX.

Fecha de ingreso al Archivo _____





19 SET. 1967

FORMA A. 20-A

1319
1319/6
1319/7319
1319/7319

E. Martínez
KALLADO
Aut.: Lic. Armando Herrera

3057-

ADMINISTRATIVO

Marcelo
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Sección de lo Contencioso



ACTUARIO

MINISTERIO PUBLICO
MEXICO

2 CUADERNOS

3057

1967

NUM. 7319

PRINCIPAL
IA. OFICINA DE TRAMITE
AMPARO EN REVISION

Quejoso LINO FLORES MERAZ Y COAGS.

Promueve en su nombre

Por violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución

Federal contra actos del Congreso del Edo. y otras

Juzgado de Distrito de EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

- 2 MAR. 1972

Fecha de intercepción julio 28 de 1967

La suspensión del acto fué

Fecha de la sentencia del interior 15 de agosto de 1967

" en que se recibieron los autos 12 de septiembre de 1967.

" de la ejecutoria de la Corte

Acto reclamado Por la expedición del decreto 293 que establece un impuesto adicional a todos los impuestos ordinarios cuyo rendimiento será destinado al sostenimiento de la UNIVERSIDAD DEL EDO. DE CHIHUAHUA.

El Juez resolvió SOPRESEYENDO Y NEGANDO EL AMPARO.

La Corte falló

Fecha en que se devolvieron los autos

Universidad de Chihuahua
Actuario,
Lic. Manuel Ruesch.
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO



158



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

AVISO DE INICIACION

Núm.

Hoy ha sido admitida la demanda de amparo que Lino Flores Me

raz.

promovió ante este juzgado contra actos de l. H. Congreso del Estado,
C. C. Gobernador Constitucional del Edo., Tesorero Gral.
del Edo., Recaudador de Rentas de esta ciudad.

que considera violatorios de los artículos 14 y 16 ... de la Constitución Gene-
ral de la República; quedando registrado en el juicio respectivo bajo el número...
216/67.

Lo que tengo la honra de comunicar a usted en cumplimiento de lo preve-
nido por el artículo 148 de la Ley de Amparo Vigente, suplicándole se sirva dar
cuenta a esa Superioridad.

Protesto a usted mi atenta consideración.

Chihuahua, Chih., a 28. de julio de 1967...

EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. ERNESTO DIAZ INFANTE.

lid.

Al C. Secretario General de Acuerdos de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, D. F.

Al C. Secretario de Acuerdos del H. Tribunal Colegiado de Tercer Circuito. Saltillo, Coah.

SUPLENTE
DE JUSTICIA DE LA
NACION

Ago 3 10 01 AM '67

OFICINA DE
CERTIFICACION
FOLIO 1
DE 1



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION



SECCION SEGUNDA

AMPAROS

NUM. 10547

720/17317/01
1a
7217


C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
MEXICO, D. F.

En grado de revisión estoy remitiendo a -
esa Superioridad, en ciento cuarenta fojas útiles, -
los autos originales del Juicio de amparo 216/67 pro-
movido por Lino Flores Meraz y Coagraviados contra -
actos del H. Congreso del Estado y otras autorida-
des, así como el escrito de expresión de agravios.

Reitero a Usted mi atenta y distinguida -
consideración.

Chihuahua, Chih., 31 de Agosto de 1967.

EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.



LIC. ERNESTO DIAZ INFANTE

cdm

80228

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA
NACION

SEP 8 11 00 AM '67

OFICINA DE
CERTIFICACION
JUDICIAL Y
CORRESPONDENCIA

Recibido por correo con los anexos
que se citan.

E. Martínez Fels

E. Martínez Fels

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

México, D. F.

LINO FLORES MERAZ, representante común de los quejosos, con carácter que tengo acreditado en el juicio de amparo señalado al rubro, con fundamento en el inciso a) de la fracción I del Artículo 84 de la Ley de Amparo, ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, vengo a interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada por el C. Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el juicio de amparo señalado al rubro, promovido contra actos del Congreso Local de Chihuahua, C. Gobernador y Tesorero General del mismo Estado, y del C. Recaudador de Rentas de esta Ciudad.

La sentencia recurrida fué pronunciada el día 15 del mes en curso, publicada en lista el día 16, surtiendo sus efectos el día 17 de este propio mes, y como se interpuso un día feriado que fué el día 20, me encuentro dentro del término legal para recurrir dicha sentencia.

En cumplimiento del Artículo 85 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política Mexicana, manifiesto que la sentencia contra la cual interpongo el recurso de revisión, causa a los quejosos los siguientes agravios:

A g r a v i o s :

1o.-El Juez "a quo", en el Cuarto Considerando de la sentencia recurrida, dice a la letra:

"Los anteriores conceptos de violación, son infundados. En efecto, el decreto impugnado adiciona los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo en el Estado, para quedar como sigue: "2106.-Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.-Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este Artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.-A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento. -Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el Artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el enteró de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua. De la simple lectura de los Artículos transcritos, se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir con el evento que se menciona en los conceptos de violación, es necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el Artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece únicamente el monto de la tasa del los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recaea sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua; que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31 Fracción IV, ya que es indudable que tiene ese carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el Artículo 3o. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 de la primera parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, editado en 1965. En estas condiciones el Decreto reclamado no es violatorio de los Artículos 3o. Fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".

Las anteriores consideraciones del "a quo", son incongruentes y contradictorias puesto que, sin que aparezca del Decreto impugnado ni una sombra, siquiera, de que el 4% que grava TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS Y DERECHOS para, destinarlo UNICA Y EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, sea un aumento de tasa, la sentencia recurrida así lo declara enfáticamente y afirma que ese aumento de tasa, como piadosamente lo denomina, no grava la instrucción universitaria, puesto que, para que tal cosa ocurriera, sería necesario que el tributo recayera sobre las personas que ocurren a la Universidad a recibir la instrucción universitaria. Este argumento nos llevaría a la conclusión de que en los colegios de paga, la instrucción resulta gratuita, debido a que, como los alumnos, por su natural dependencia económica, no hacen los pagos de sus colegiaturas, la instrucción que reciben no es a título onerosa.

Como queda demostrado, el impuesto impugnado ha sido creado con el exclusivo fin de sostener a la Universidad de Chihuahua, en su misión educadora, con detrimento de los causantes de dicho impuesto y en contravención del Artículo 30. Constitucional que establece categóricamente que la instrucción que imparta el Estado debe ser gratuita. Por tanto éste debe ajustarse a sostener a la Universidad en la forma y términos que la Ley de Egresos del Estado en su Partida 217 fracciones IV y V señala, que destina para la Universidad la suma de ---- \$4.630.000.00; sin que dicha partida pueda modificarse, sino con cargo a los gastos públicos y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria del Artículo 30. Constitucional. Tal disposición legal establece, entre otras condiciones, la capacidad del presupuesto y no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los centros educativos superiores; en consecuencia, el Juez a quo, al no tomar en consideración lo establecido por el precepto Constitucional invocado, viola en agravio de los quejosos el principio de legalidad garantizado por los Artículos 14 y 16 Constitucionales.

II.-La sentencia recurrida establece que el segundo concepto de violación es infundado, pretendiendo que la expedición del Decreto impugnado fué expedido por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 Fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado. Tal apreciación es inexacta, porque si bien es cierto que la fracción I del Artículo 64 da facultades al Congreso para legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su Gobierno y administración, también es cierto que la fracción VI del mismo Artículo, sólo faculta al Congreso para fijar anualmente todas las bases para la administración pública del Estado, PREVIO EXAMEN DEL PRESUPUESTO que presente el Ejecutivo; el Artículo 162 invocado por el a quo, faculta al Congreso para expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos, en VISTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, el cual no está facultado para modificar; además deberá sujeción a lo establecido por el Artículo 163 que establece que el año fiscal para el Estado y los Municipios se contará del 1.º de enero al 31 de diciembre de cada año. Por tanto las facultades del Congreso son limitadas, máxime cuando no fundó ni motivo el Decreto impugnado y establece un impuesto exclusivo, esto es: privativo, prohibido por la Constitución Política del Estado, como se ha demostrado anteriormente al establecer las restricciones establecidas en el artículo 162 de la misma, por la Constitución Federal, como se comprueba plenamente con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia definida:

"De acuerdo con el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero, que sea proporcional; segundo, que sea equitativo, y tercero que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo establecido por la Constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnimoda para establecer las exacciones que, a juicio del Estado, fueran convenientes, sino una facultad limitada por esos tres requisitos"

Tomó LXV.-	Arrigunaga Peón Manuel de	Pág. 2723
" LXIX.-	Cabezut Alberto M. y Comg.	" 398
" LXIX.-	Cabezut Alberto M. y Comg.	" 5432
" LXXXIII.	Holazón García Fulgencio.	" 813
" LXXV.-	Mora Manuel F.	" 3603

(Copilación del Semanario Judicial de la Federación, T. LXX, Pág. 1000)

Por tanto, al dar interpretación indebida a las disposiciones constitucionales que se han citado y al no acatar la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia, el Juez sentenciador falta a los más elementales principios de legalidad violándolos en nuestro agravio y en contravención de los Artículos 14 y 16 Constitucionales.

4

III.-El Decreto impugnado de inconstitucionalidad, expresa con toda claridad y precisión: "Se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos....." No cabe, en consecuencia, ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente.

Mucho menos cabe la interpretación arbitraria que pretende darle el Juez "a quo", en el sentido de que se trata de un aumento de tasa sobre los impuestos. Por tanto el decreto viola los más elementales principios de tributación y jamás se ha dado el caso de que las erogaciones, como son los impuestos gravados, sean motivo de tributación.

Así pues, queda claro que el Decreto de que se trata, grava erogaciones y no percepciones, por lo que es a todas luces ilegal, injusto y monstruoso.

Por tanto viola los principios de justicia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y el Juez, al no tomar en consideración las razones y fundamentos en que basamos nuestra demanda de amparo, viola en nuestro agravio dichas garantías constitucionales.

Por todo lo expuesto y fundado, a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, pedimos atentamente:

PRIMERO:-Tener por interpuesto en tiempo y forma el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de garantías.

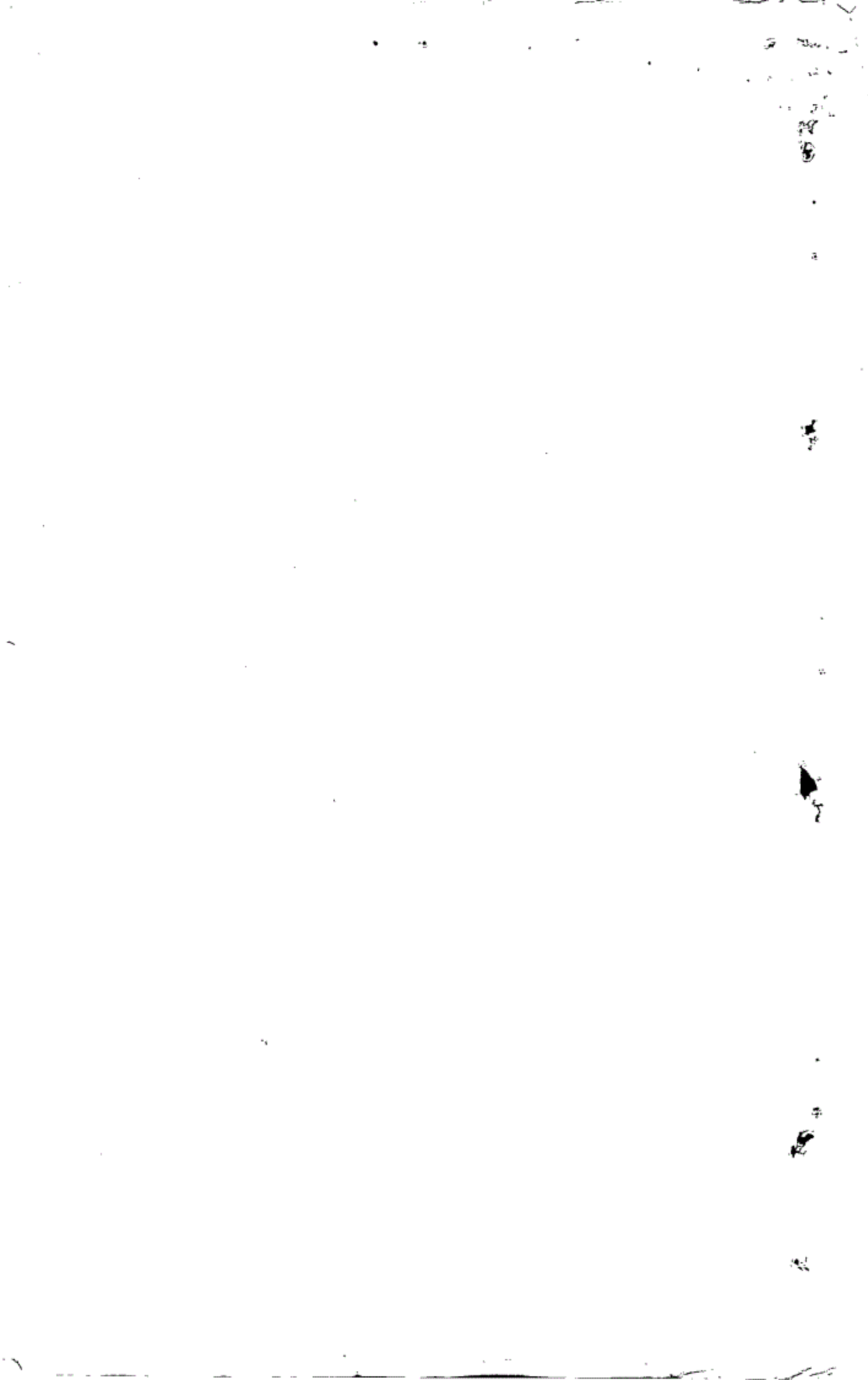
SEGUNDO:-Declarar operantes los agravios que se han dejado expuestos en este escrito, revocando la sentencia recurrida.

TERCERO:-Sentenciar declarando que la Justicia de la Unión nos ampara y protege contra los actos reclamados, emanados de las autoridades responsables.

Chihuahua, Chih., 22 de Agosto de 1967.
Atentamente.



Lino Flores Merz





PODER LEGISLATIVO

Secretaría

NUM.

364.

Riballado

I.G.E.

Forma No. 23-A⁵

a

Chihuahua, Chih., Noviembre 24 de 1967.

C. PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACION.
Depto. de Actuarios.
México, D. F.

Esta Cámara Legislativa en sesión de hoy, quedó enterada de su atento escrito de fecha 13 de octubre ppdo., relacionado con el Juicio de Amparo número 7319/67 promovido por el C. ~~Lino Flores Ma-~~raz y Coags., contra actos de este Alto Cuerpo y otras autoridades.

Reiteramos a usted las seguridades de --
nuestra atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO : NO REELECCION.

DIPUTADO SECRETARIO

DIPUTADO SECRETARIO.

PROF. ROBERTO GONZALEZ LOYA JULIO VALLEGAS CORDERO.

'mfa.

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA
NACION

110632

Dic 5 11 38 AM '67

OFICINA DE
CERTIFICACION
JUDICIAL Y
CORRESPONDENCIA

14 DIC. 1967

se agrega el presente documento a los antecedentes
para los efectos a que haya lugar. Conste.

POR ACUERDO DE
LA PRESIDENCIA
SE AGREGA A SU
EXPEDIENTE
CONSTE.
MEXICO.

8 JUL 1968



GOBIERNO DEL ESTADO

I.G.E.

Forma 5.

Dependencia DEPARTAMENTO DE GOBERNACION.
Sección _____
Núm. de Oficio 302-
Expediente 212.3/181287. **28934**

ASUNTO: -ACUSE DE RECIBO.

Chihuahua, Chih., Noviembre 25 de 1967.

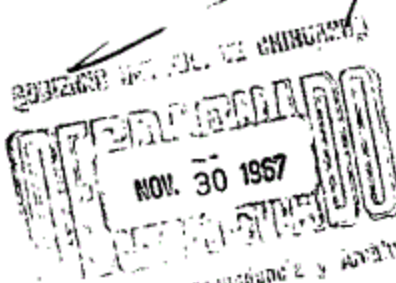
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.
MEXICO, D. F.

Por acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado, me permito acusar recibo de su atento oficio número 19215, y que se relaciona con el Juicio de Amparo número 216/67, promovido por LINO FLORES MERAZ y Coagraviados, -- contra actos del citado funcionario y de otras autoridades.

Reitero a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

~~SUPRACIO ELECTIVO. NO REELECCION.~~

LIC. AUGUSTO MARTINEZ GIL.



COE.-

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales
"CHIHUAHUA, RUTA HOSPITALARIA A LOS JUEGOS OLIMPICOS"

Al contestar, sírvase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente

465

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA
NACION

Dic 5 11 36 AM '67

OFICINA DE
CERTIFICACION
JUDICIAL Y
CORRESPONDENCIA

Por acuerdo del S. Presidente de la Suprema
Corte se agrega el Presente oficio a los antecedentes

Conste.

México, D. F. 14 ENE. 1969





PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

P R I N C I P A L .

México, D.F., Noviembre 24 de 1967.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
P R E S E N T E .

03.57.

LINO FLORES MERAZ Y COAGRAVIADOS, promovieron amparo por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales _ ante el C. Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua en contra del Congreso de esa Entidad Federativa, su Gobernador Constitucional, su Tesorero General y el _ recaudador de rentas de la Ciudad de Chihuahua, señalando como actos reclamados: la expedición del Decreto No. _ 293 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 _ de Junio de 1967, estableciéndose un impuesto adicional _ sobre todos los impuestos ordinarios, derechos y productos a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua y cuyo rendimiento será _ destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la _ Universidad de Chihuahua; la firma y promulgación de ese Decreto por parte del Gobernador de esa Entidad; el _ refrendo y actos de ejecución por parte del Tesorero General y el recaudador de rentas y los efectos y consecuencias derivados de esos actos.

El C. Juez del conocimiento, por sentencia de 15 de _ Agosto de 1967, sobreseyó el juicio de garantías promovido por los quejosos respecto al refrendo del Decreto No. 293 que reclamaron del C. Tesorero General del Estado y _ les negó el amparo de la Justicia de la Unión.

Los agraviados, por conducto de su representante co--

mún, por escrito de 22 de Agosto último interpusieron __
revisión, argumentando que el a quo violó en su perjui--
cio el principio de legalidad garantizado por los ar----
tículos 14 y 16 Constitucionales y también los artículos
64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política __
del Estado de Chihuahua.

En opinión del suscrito, los agravios hechos valer __
son infundados, ya que la sentencia es legal y está debi-
damente motivada, porque es cierto, como lo dice el juz-
gador que los preceptos impugnados no gravan la educación
universitaria, sino que el impuesto recae respecto de to-
dos los contribuyentes por las diversas actividades que __
desarrollan y que han sido ya calificadas con anteriori--
dad por el Estado, y únicamente adiciona los impuestos que
con anterioridad pagaban, con el 4% para destinarlo al sog-
tenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto
público estando en consonancia la fracción IV del artículo
31 de la Carta Fundamental de la República Mexicana, ya __
que la educación universitaria tiene ese carácter y está a
cargo del Estado, siendo falso que las consideraciones del
juzgador sean incongruentes y contradictorias y también que
grave la instrucción universitaria, pues es cierto que para
que tal cosa ocurriera sería preciso que el tributo recaye-
ra sobre las personas que concurren a la Universidad, aun--
que para el sostenimiento de ésta deban de contribuir obli-
gatoriamente los causantes, y por eso esta argumentación es
ineficaz e improcedente; y también es inoperante el segundo
concepto de agravios hecho valer, ya que la Legislatura Lo-
cal si está facultada legalmente para fijar los impuestos __
adicionales que juzgue convenientes, tal y como el presente,



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

2.

en uso de las facultades que le confieren los artículos_
64 fracciones I y VI de la Constitución Política del Esta_
do de Chihuahua y por último, también es infundado el últi_
mo de los agravios hechos valer, y del que se solicita se_
revise, porque el del conocimiento aplicó debidamente la _
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política _
de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Decreto reclama_
do no viola los requisitos de proporcionalidad y equidad,_
ya que lisa y llanamente aumenta en un 4% los previamente_
establecidos, en la proporción y medida de los impuestos _
que tengan que cubrir, y por tanto siendo infundados los _
agravios hechos valer, procede que ese Máximo Tribunal con_
firme el fallo recurrido.

Por lo expuesto, se solicita de esa H. Suprema Corte _
de Justicia de la Nación, se sirva CONFIRMAR el fallo re--
currido.

A T E N T A M E N T E .
EL AGENTE DEL MIN. PUB. FED. AUX.

mf
LIC. CARLOS MARTINEZ LUDERT.

lop

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



SECCION PRIMERA.

Doc. n.º 7319/67.

México, Distrito Federal, a 22 veintidós de --
septiembre de 1967 mil novecientos sesenta y siete.

Con el aviso de iniciación y el oficio de remisión de los autos, fórmese y regístrese el toca relativo al amparo promovido por Lino Flores Meraz y coagregados contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras. Acúsese recibo. Visto el recurso de revisión que se hace valer contra la sentencia dictada en el juicio de amparo a que este toca corresponde y teniendo en consideración que en el presente caso se debate el problema de la inconstitucionalidad de una ley, y -- además, estando interpuesto en tiempo y forma dicho recurso, con fundamento en los artículos 84, fracción I, inciso a), 86 y 90 de la Ley de Amparo y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

I.- Se admite el recurso de revisión interpuesto por la parte que osea, pónganse los autos a la vista de las partes por diez días para que aleguen lo que a sus derechos convenga; transcurrido ese plazo, pase el asunto por igual término al Ministerio Público para que formule pedimento; y, cumplido que sea ese requisito, turnense los autos al Pleno para su resolución.

II.- Notifíquese.

Lo acordó y firma el ciudadano licenciado Agapito Pozo, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doy fe.

RHM/ccs.

Se acusó recibo de los autos. Conste.

13 OCT. 1967

En _____ por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior a los interesados y por oficio a las autoridades responsables según minuta que se agrega.



17 OCT. 1967

En _____ Notificado el C. Procurador General de la República del auto que antecede, dijo que designa para intervenir en este negocio al C. Agente Licenciado Julio Sánchez Vargas quien estando presente quedó enterado y firma.

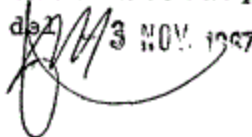
EL PRIMER SUB-PROCURADOR GENERAL DE
LA REPÚBLICA ENCARGADO DEL DESPACHO

LIC. Julio Sánchez Vargas



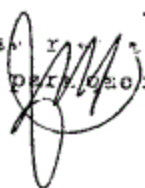
- 3 NOV. 1967

En _____ se recibe este expediente del Q: Actuario y queda a la vista de las partes por diez días los que corren del 3 NOV. 1967 al 14 NOV. 1967 del presente.



15 NOV. 1967

En _____ se revoca este expediente al Ministerio Público, por no conformarse al pedimento Conste.





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CIUDAD DE MEXICO, D.F.

09954

México, 7315/67.

Con el oficio de usted, número 6547 de -
fecha 31 de agosto último, se recibieron en este Corte
los autos que al mismo se acompañan, relativos al --
juicio de amparo número 216/67, interpuesto por Lina -
María Méndez y allegados, contra el Sr. Col. Gonzalo
de la Cruz.

Protesta a usted mi atento consideración.

México, D.F., a 2 de septiembre de 1967.

Y así lo hago constar en el presente.

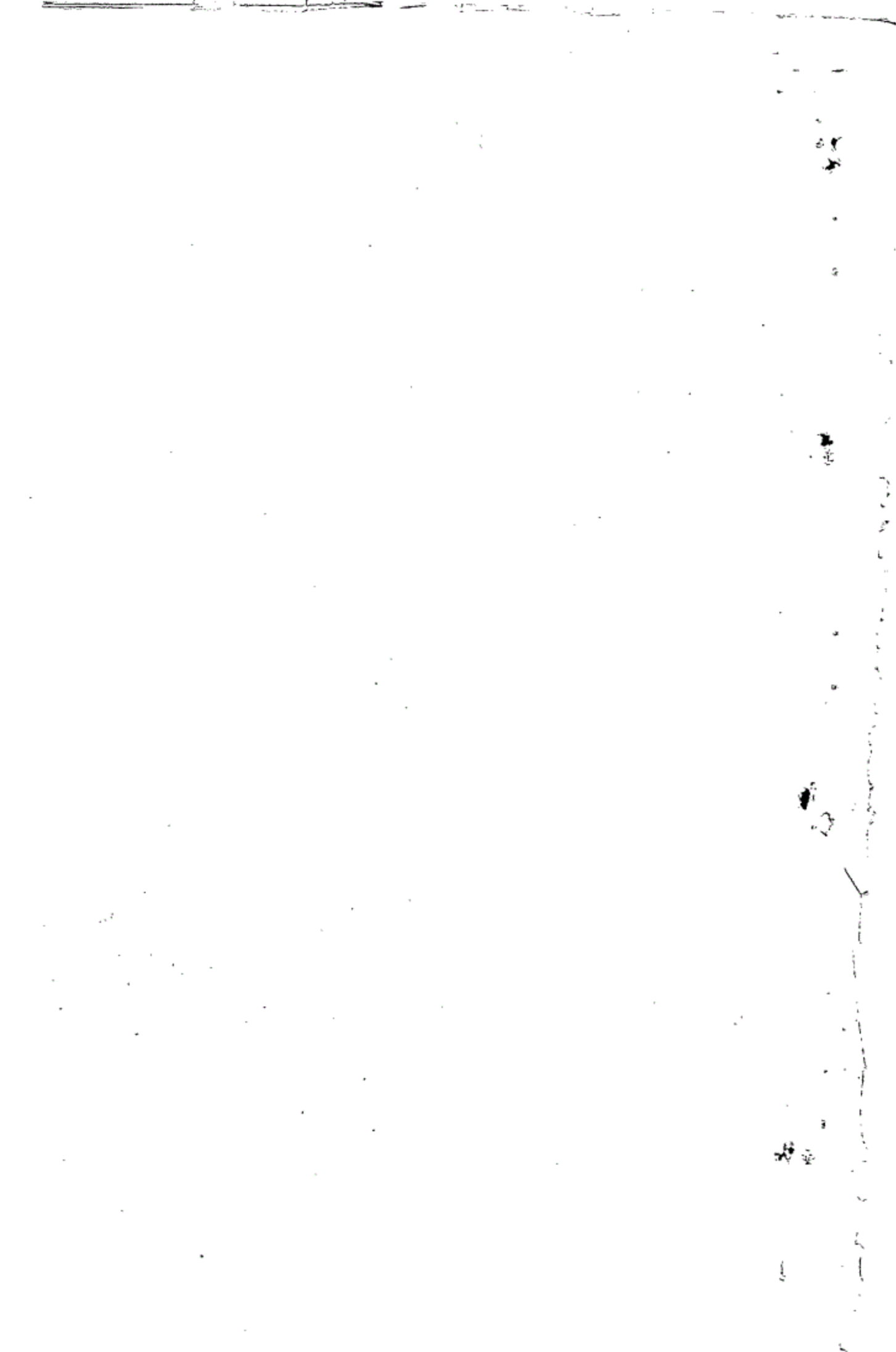
M I N U T A

C.C.B.

- 6 NOV. 1967

El se recibió este expediente del O.
Agente del Ministerio Público, con el pedimento
que se agrega. Conste.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape with a horizontal line extending to the right.





I.G.E.

7. 19/67

Forma C. y A.-1

ACUSE DE RECIBO
DE LA

OFICINA CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

No. de Registro 17158
Su escrito número 216/67
De fecha 13 de octubre de 1967.
Se turnó a GOBERNACION
Expediente 212.3/181287
Chihuahua, Chih., a 24 de Noviembre de 1967.

ASUNTO: Amparo promovido
por LINO FLORES MERAZ Y COAGS.

Consignatario:

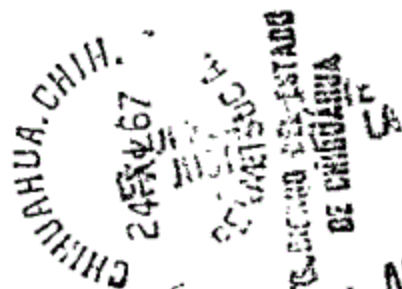
DEPARTAMENTO DE ACTUARIOS,
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DE LA NACION.,
MEXICO, D.F.

El Jefe de la Oficina

PARA POSTERIOR INFORMACION, FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE
REGISTRO Y OFICINA A DONDE SE TURNO EL ASUNTO

lvoc.-

Chihuahua - Ruta Hospitalaria a los Juegos Olímpicos



Nov 28 11 44 AM '67

105950



CORRESPONDENCIA
Y ARCHIVO

El 2 DIC. 1967 por acuerdo de la presidencia
se agrega el presente documento a los antecedentes
para los efectos que haya lugar. Goyate.





México, Distrito Federal, a

once de enero de mil novecientos -
sesenta y ocho.

Pase este asunto para su estudio,

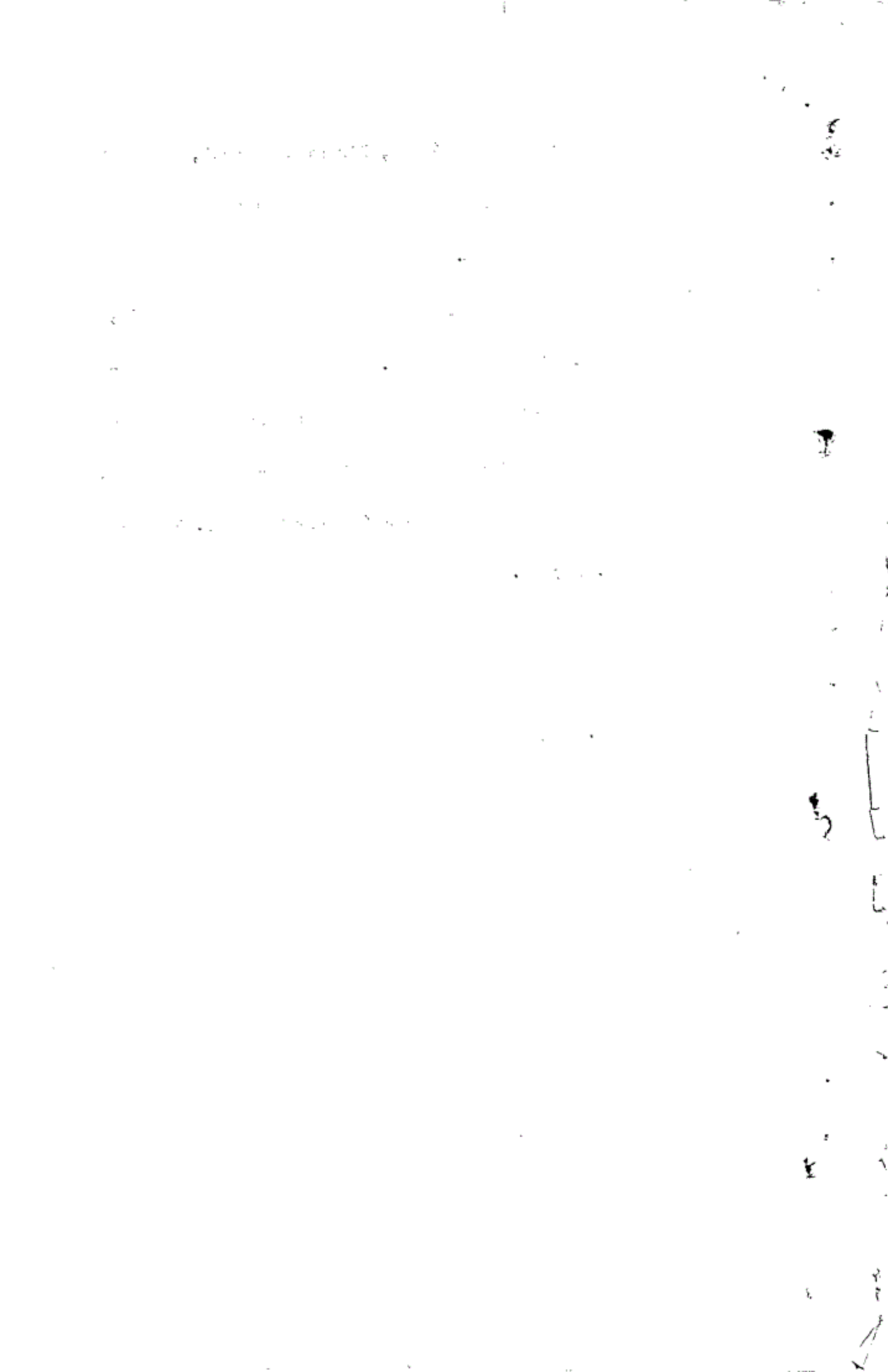
R 7319/67

al C. Ministro **MARIO G. REBOLLEDO** a quien le
corresponde según el turno especial que para el--
efecto se lleva en la Oficina General de Acuerdos.

Lo acordó y rubrica el C. Presiden

te. Doy fe.

emo.



14



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

AMPARO EN REVISION 7319/67
LINO FLORES MERAZ Y COAGS.

T E S I S :

UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA, IMPUESTOS PARA SU SOSTENIMIENTO.- El artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Fundamental establece: "Son obligaciones de los mexicanos: -- IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

Ahora bien, esa obligación tiene por objeto la satisfacción de los gastos públicos que el Estado debe cubrir en beneficio de la colectividad. Que con los impuestos deban cubrirse los gastos públicos no constituye una prohibición, para que el tributo, por ley del Congreso, se destine desde su origen a cubrir un gasto en especial, si es en beneficio de la colectividad y a ello está obligado el Estado. Si alguna prohibición contiene el precepto, no es otra que la de que el impuesto se destine a fines diferentes a los del gasto público, pero en el caso se destinó al sostenimiento de la Universidad del Estado, que es un gasto público.

En consecuencia es correcta la consideración que al respecto hace el Juez de Distrito en su sentencia al referirse a la fracción IV del artículo 31 constitucional, ya que mientras el impuesto se destine a un gasto público, se estará cumpliendo con el mandato constitucional de destinar el impuesto a gastos en beneficio de la colectividad.

3

4

5

6



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

AMPARO EN REVISION 7319/67
LINO FLORES MERAZ Y COAGS.

T E S I S:

TESIS: ARTICULO 2106 DEL DECRETO 293 EXPEDIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NO ES INCONSTITUCIONAL. Con el Decreto 293 expedido por el Congreso de Chihuahua no se gravan otros impuestos, sino que únicamente se aumenta la tasa de los existentes en un 4%. En efecto de la simple lectura del artículo 2106 del Decreto mencionado y de la -- interpretación armónica de los dos párrafos del citado artículo se desprende que se trata de un ingreso ordinario que se establece con el carácter de impuesto adicional, o sea -- que no se gravan los otros impuestos, sino que los mismos -- son adicionados en un 4%, consistiendo por tanto simplemente en un aumento de los preexistentes, más de ninguna manera constituye un impuesto sobre los demás impuestos, como lo pretenden los recurrentes, por lo que el hecho generador del crédito fiscal continúa siendo el de cada uno de los -- impuestos anteriores adicionándose únicamente con el 4%.

RECEIVED
JAN 1 1964

RECEIVED JAN 1 1964

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



S I N T E S I S :

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

Amparo en Revisión promovido por LINO FLORES MERAZ Y COAGS., contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades, consistentes esencialmente en la expedición, promulgación, publicación y ejecución del Decreto No. 293 publicado el diecisiete de junio de mil novecientos sesenta y siete.

Los quejosos señalan como antecedentes que son -- causantes de diversos impuestos y que el Decreto combatido establece un impuesto adicional de 4% sobre los mismos, para aplicar su rendimiento, única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.

En sus conceptos de violación señalan que dicho Decreto viola la fracción VII del artículo 3o. Constitucional ya que si la educación que imparte el Estado es gratuita, no puede afectarse a los causantes de impuestos, con -- uno específicamente aplicado a la educación que imparte el Estado.

Que el Congreso del Estado viola el artículo 74, -- fracción VI de la Constitución Política de la entidad y como consecuencia los artículos 14 y 16 constitucionales.

Estimaron igualmente que se violan los principios de proporcionalidad y equidad garantizados por el artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República.

que con sus actos el Tesorero General del Estado -- y el Recaudador de Rentas violan en su perjuicio la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

El Juez de Distrito sobreseyó el juicio respecto -- al refrendo que se reclama del Tesorero General del Estado -- y negó el amparo respecto de las demás autoridades fundándose en que no se grava la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes adicionan-

Amp. en Rev. 7319/67

do los impuestos anteriores con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua siendo este un gasto público como lo requiere la fracción IV del artículo 31 Constitucional.

Que no se viola la Constitución del Estado ya que el Congreso tiene facultades para legislar en todo lo concerniente al régimen interior de la entidad.

Igualmente señala que no se violan los principios de proporcionalidad y equidad porque no se gravan los otros impuestos sino que únicamente se aumenta la tasa de los previamenteestablecidos en un 4%.

El proyecto consulta se confirme la sentencia en la parte que se revisa considerando que no se grava la educación, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes, adicionando únicamente en un 4% los impuestos preexistentes.

Respecto a que el impuesto se dedica única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad se considera que no se viola el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna ya que el impuesto se destina al pago de un gasto público como es el sostenimiento de la Universidad del Estado, (se cita al respecto la Tesis Jurisprudencial No. 28, publicada en las páginas 75 a 79 de la Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, editado en 1965).

Respecto al segundo agravio se considera que los quejosos y recurrentes no probaron que se violara la Constitución Federal por lo que se confirma la sentencia en la parte que se revisa y se niega el amparo.



AMPARO EN REVISION 7319/67
LINO FLORES MERAZ Y COAGS.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

MINISTRO PONENTE: LIC. MARIO G. REBOLLEDO.
SECRETARIO: LIC. ISIDRO GUTIERREZ GONZALEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal -
Pleno, correspondiente al día

V I S T O S ; y

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- Por escrito presentado el veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y siete, ante el Juez de Distrito en Chihuahua, Lino Flores Meraz, Pilar Garay Vda. - de Balderrama, Rosendo Valdez Mendoza, Elias Márquez Palacios, María Guadalupe Navarrete de Tarango, Herminia Coronel de - Márquez, María Acasia Zuviata de Valdez, Jesus Francisco Márquez Medrano, Concepción Morales Castillo, Catalina Rivera - de Portillo, Dolores García Vda. de Piñon, Julia Mendoza de Anchondo, María de Jesus Fernández Vda. de Mendoza, Socorro Antiveros de Alfaro, Benjamin Chico Flores, Carmen Muñoz de Chico, Candelaria Márquez Ruiz, Juan González Delgado, Cipriano Hernández Bosa, Manuel Márquez Medrano, Daniel Jaquez Marquez, Manuel Granillo Aguilar, Emma Granillo Jaquez, Lorenzo Ramírez Reyes, Luis Tarango González, Alfredo Estrada Hernández, Lidia Gardea de Estrada, Benita Carbajal Vda. de Zuñiga, Ana Beltrán de Chavarría, Manuel Rodríguez Frescas, Oscar Adame Celiz, Jovita Adame Celiz, Modesto Chávez Soto, Carlos Terrazas Fernández, Isidra Meza de Rodríguez, Teresa García de Loya, Julian Márquez Marrufo, Sixto Irigoyen Loya, Manuela Ortiz de Irigoyen, Juliana Flores de Almodovar, Manuel Loya Ortiz, Adela Durán de Valenzuela, Marcos Prieto - Saenz, Alejandro Bonilla Villado, Dolores Mendoza de Arzaga,

Carlota Loya de Romero, Pedro Fernández Mendoza, Jesús Grillo Estrada, Josefa Portillo de Estrada, Candelario Ronquillo Molina, María Ruiz de Márquez, Manuel y Bertha Alicia Sigala, Guillermo Salas Arana, Jesús Elías Márquez Granillo, José Dolores Hernández Caballero, Julia Mendoza de Lara, -- Rosario Castelo Vda. de Rodríguez, José Luis Chávez Terrazas, Amparo Carrasco de Ramos, Eusebio López Angulo, Francisco C. Estrada Chacón, Victor Manuel Gutiérrez Santillan, Guillermo Machado Martínez, Samuel Padilla Aguilar, José Escalera Jiménez y Juventino Balderrama Montez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador de la misma entidad, Tesorero General del Estado y Recaudador de Rentas de Chihuahua; actos que hicieron consistir:

"Del H. Congreso del Estado, reclamamos la expedición del Decreto Núm. 293, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 17 del mes de junio último y que ha entrado en vigor a partir del día primero del mes en curso, estableciendo un impuesto adicional SOBRE TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, y cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- Del C. Gobernador del Estado, reclamamos la firma y promulgación del Decreto citado.- Del C. Tesorero General del Estado, reclamamos el refrendo y actos de ejecución del Decreto. Del C. Recaudador de Rentas, los actos de su ejecución".

Señalan como garantías violadas las que consagran los artículos 30., 14 y 16 de la Constitución Federal.

SEGUNDO.- Relatan los quejosos como antecedentes, los que a continuación se transcriben:

"1o.- Los señores causantes de impuestos al Estado que debe pagar la Recaudación de Rentas. Los



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

- 3 -

Amp. en Rev. 7319/67

"10.- Los suscritos somos causantes de impuestos al Estado que debemos pagar en la Recaudación de Rentas, como lo comprobamos con los anexos que acompañamos.-2.ª La Ley de Egresos del Estado de fecha 31 de diciembre de 1966, fija la distribución que debiera darse a los impuestos que deberán recaudarse durante el año de 1967; y en esa Ley se señala en su partida 217, fracciones 4 y 5, la suma de \$ 4.630.000, para la Universidad de Chihuahua, que este Organismo recibirá durante el año en curso.-30.-Pero en el Núm. 48 del Periódico Oficial del Estado, de fecha 17 de junio último, se publicó el decreto Núm. 293 expedido por el Congreso del Estado, estableciendo un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios, derechos y productos a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, para aplicar su rendimiento, única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- La vigencia de este Decreto, es a partir del día primero del mes en curso."

TERCERO.- Los quejosos formularon como conceptos de violación los siguientes:

"I.- El decreto impugnado, viola en nuestro agravio la Fracción VII del Artículo 30. Constitucional, que establece que la educación que imparta el Estado, será gratuita; en consecuencia, no puede afectarse a los causantes de impuestos, con alguno que específicamente debe aplicarse a la educación que el Estado imparta".

"Por tanto, el Congreso del Estado, al crear el impuesto del 4% específicamente para destinarlo EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, viola lo dispuesto por el artículo 30. de la Constitución Política Mexicana, en su fracción VII y viola en nuestro perjuicio

cio la garantía de legalidad que nos conceden los artículos 14 y 16 Constitucionales".

"II.- El Congreso del Estado viola en nuestro -- agravio el artículo 64, fracción VI de la Constitución Política del Estado, que dice literalmente: "Art. 64.-Son atribuciones del Congreso:... VI.- Fijar anualmente todos los -- gastos de la Administración Pública del Estado, previo examen del presupuesto que presente el Ejecutivo"; y viola en nuestro perjuicio el artículo 163 de la misma Constitución, que establece categóricamente: "Art. 163.-El año Fiscal para el Estado y los Municipios, se contará del primero de -- enero al treinta y uno de diciembre de cada año". Ahora -- bien, si el Congreso del Estado, mediante Decreto Núm. 216- de 31 de enero de 1966, fijó los gastos para el año que cupo, al fijar nuevos gastos, sin tener facultades para ello y contraviniendo los sistemas procesales en materia hacendaria, viola en nuestro agravio los artículos 14 y 16 Constitucionales".

"III.- El Congreso del Estado, en el Decreto que se estudia, viola en nuestro agravio los principios de proporción y equidad, puesto que grava no PERCEPCIONES, sino -- EROGACIONES, como son los impuestos gravados por el mismo -- Decreto. No conocemos, hasta ahora, ley alguna que establezca que las erogaciones son sujetos de impuestos. Esto constituye un rompimiento con la técnica de tributación, pues -- todo impuesto nace de un bien o un servicio prestados por -- el Estado y recibido por el causante; pero es absurdo que -- un impuesto cause otro impuesto, o sea que una erogación resulte gravable, como en el caso que nos ocupa. Por tanto el Decreto carece de equidad y viola el artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República, siendo aplicable la Tesis Jurisprudencial que dice textualmente: "Si -- bien



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

Amp., en Rev. 7319/67

bien el artículo 31 Constitucional que establece los requisitos de proporción y equidad del impuesto como derechos de un contribuyente, no está en el Capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de ese derecho es una violación de esas garantías. (Sem. Jud. de la Fed. Tomo XX, Pág. 930 y Tomo XXI, Págs. 950 y 2035)."

"IV.- El Gobernador del Estado, al firmar y promulgar el Decreto Núm. 293 que crea un impuesto SOBRE TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS, para aplicarlo única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos concede los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que sus actos carecen de fundación y motivación."

"V.- El C. Tesorero General del Estado, por las razones que se han dejado expuestas, al refrendar el decreto de que se trata, exigiéndonos obligaciones creadas por el mismo Decreto, viola en nuestro perjuicio la citada garantía de legalidad".

"VI.- Finalmente, el Recaudador de Rentas, al ordenar se exija el cumplimiento de las obligaciones nacidas de un Decreto que grava TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS, con un 4% destinado única y exclusivamente a la Universidad de Chihuahua, viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos conceden los artículos 14 y 16 Constitucionales".

CUARTO.- El Juez de Distrito admitió la demanda por auto de veintiocho de julio de mil novecientos sesenta y siete; registrándola con el número 216/67, y seguido el juicio por sus trámites legales dictó sentencia el quince de agosto del mismo año, con los siguientes puntos resolutivos:

"Primer.- Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por Lino Flores Meraz y coagraviados res-

pecto al refrendo del Decreto Núm. 293 que reclaman del C. Tesorero General del Estado".

"Segundo.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lino Flores Meraz y Coags., contra actos que reclaman del H. Congreso del Estado, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas, consistentes en la expedición, promulgación, aplicación y ejecución del mencionado Decreto".

"Tercero.- Notifíquese".

La sentencia se apoya en las siguientes consideraciones:

"Los anteriores conceptos de violación son infundados".- En efecto, el decreto impugnado adicionó los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo del Estado, para quedar como sigue: "2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público con este mismo carácter se establece un impuesto adicional de 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento.- Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el enterode los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua".- De la simple lectura de los artículos transcritos se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravámen o retribución por la educación univer



Amp. en Rev. 7319/67

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

sitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir en el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31, fracción IV, ya que es indudable que tiene este carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el artículo 30. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 de la Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación editado en 1965. En estas condiciones el decreto reclamado no es violatorio de los artículos 30., fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".

"En cuanto al segundo concepto de violación, tampoco es fundado, ya que la expedición del decreto impugnado, fue hecha por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64, fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado, que establece,-

respectivamente, que son atribuciones del Congreso del Estado, legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones necesarias para su gobierno y administración, en todos los ramos que uno y otra comprenden, fijar anualmente todos los gastos de la Administración pública y expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos y que podrá variarlas o modificarlas en vista del presupuesto de egresos. El artículo 2106 del Código Administrativo del Estado establece que son ingresos ordinarios aquellos que se obtienen normalmente para la atención de los gastos públicos; como el sostenimiento de la Universidad tiene ese carácter, es evidente que la Legislatura local está facultada legalmente para fijar el impuesto adicional de referencia. Por lo anterior se estima que los actos que se reclaman de la Legislatura local no violan los preceptos citados ni las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal".

El tercer concepto de violación es igualmente infundado. Los quejosos sostienen que el decreto en estudio viola los principios de proporción y equidad porque "grava no percepciones, sino erogaciones, como son los impuestos gravados por el mismo decreto". No es verdad lo anterior porque el impuesto no grava los otros impuestos sino que únicamente aumenta la tasa de los previamente establecidos y como dicho aumento es del 4% para todos queda la misma proporción, pues los que pagaban cien pesos, pagarán ciento cuatro pesos y los que tenían impuestos por un mil pesos tendrán que pagar mil cuarenta pesos, o sea, que el aumento es proporcional y equitativo porque pone a todos los contri



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

Amp. en Rev. 7319/67

buyentes en la misma situación, por lo que no es violatorio del artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. La Tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita no es aplicable en la especie porque no apoya los conceptos de violación ni está relacionada con la cuestión planteada."

"Respecto de los actos que se hacen consistir en la expedición, promulgación, refrendo, aplicación y ejecución del decreto, solamente cabe agragar que no siendo inconstitucional el decreto por las consideraciones expuestas con anterioridad tampoco lo son dichos actos, porque no se impugnan por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del contenido del decreto".

"Como consecuencia de todo lo anterior se estima que los actos reclamados no son violatorios de los artículos 30., 14, 16 y 31 de la Constitución Federal por lo que corresponde negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan los quejosos".

QUINTO.- Inconformes con la sentencia anterior, los quejosos interpusieron recurso de revisión, mismo que les fue admitido por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia con fecha veintidos de septiembre de mil novecientos sesenta y siete.

El Agente del Ministerio Público Federal designado para intervenir en este asunto, formuló pedimento en el sentido de que se confirme la sentencia recurrida.

Por acuerdo del propio Presidente de este Alto Tribunal de once de enero de mil novecientos sesenta y ocho, se mandó turnar el presente asunto para su estudio al Ministro Relator.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente pa-

ra conocer del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 11, fracción IV Bis, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de -- que se interpuso en contra de una sentencia dictada por -- Juez de Distrito, en un juicio de amparo en el que se controvierte la constitucionalidad del Decreto número 293, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua del día diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y siete, en el que se establece un impuesto adicional sobre los impuestos ordinarios, derechos y productos a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO.- En el escrito de revisión se expresan los siguientes agravios:

"1o.- El Juez "a quo", en el Cuarto Considerando de la sentencia recurrida, dice a la letra:

"Los anteriores conceptos de violación, son infundados. En efecto, el decreto impugnado adiciona los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo en el Estado, para quedar como sigue:- "2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.- Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento.- Los ingresos que le correspondan percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el entero de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se -- concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua". De la simple lectura de los artículos transcritos, se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de



Amp. en Rev. 7319/67

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir con el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al -- adicionar el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de -- Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31, fracción IV, ya que es indudable que tiene ese carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el artículo 30. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la -- Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 de la Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, editado en 1965. En estas condiciones el Decreto reclamado no es violatorio de los artículos 30., -- fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".

"Las anteriores consideraciones del "a quo", son incongruentes y contradictorias puesto que, sin que aparezca el Decreto impugnado ni una sombra, siquiera, de que el 4% que grava TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS Y DERECHOS para

destinarlo UNICA Y EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la -- Universidad de Chihuahua, sea un aumento de tasa, la sentencia recurrida así lo declara enfáticamente y afirma que ese aumento de tasa, como piadosamente lo denomina, no grava la instrucción universitaria, puesto que, para que tal cosa -- ocurriera, sería necesario que el tributo recayera sobre -- las personas que concurren a la Universidad a recibir la -- instrucción universitaria. Este argumento nos llevaría a la conclusión de que en los colegios de paga, la instrucción resulta gratuita, debido a que, como los alumnos, por su natural dependencia económica, no hacen los pagos de sus colegiaturas, la instrucción que reciben no es a título oneroso".

"Como queda demostrado, el impuesto impugnado ha sido creado con el exclusivo fin de sostener a la Universidad de Chihuahua, en su misión educadora, con detrimento de los causantes de dicho impuesto y en contravención del artículo 3o. Constitucional que establece categóricamente que la instrucción que imparta el Estado debe ser gratuita. Por tanto éste debe ajustarse a sostener a la Universidad en la forma y términos que la Ley de Egresos del Estado en su Partida 217 fracciones IV y V señala, que destina para la Universidad la suma de \$4,630.000.00, sin que dicha partida pueda modificarse, sino con cargo a los gastos públicos y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria del artículo 3o. Constitucional. Tal disposición legal establece, entre otras condiciones, la capacidad del presupuesto y no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los centros educativos superiores; en consecuencia, el Juez a quo, al no tomar en consideración lo establecido por el precepto Constitucional invocado, viola en agravio de los quejosos el principio de legalidad garantizado por los artículos 14 y 16



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CONSTITUCIONALES".
DE LA NACION.

"II.- La sentencia recurrida establece que el segundo concepto de violación es infundado, pretendiendo que la expedición del Decreto impugnado fué expedido por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64, fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado. Tal apreciación es inexacta, porque si bien es cierto que la fracción I del artículo 64 da facultades al Congreso para legislar en todo lo concerniente el régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su Gobierno y administración, también es cierto que la fracción VI del mismo artículo, sólo faculta al Congreso para fijar anualmente todas las bases para la administración pública del Estado + PREVIO EXAMEN DEL PRESUPUESTO que presente el Ejecutivo; el artículo 162 invocado por el a quo, faculta al Congreso para expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos, en VISTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, el cual no está facultado para modificar; además deberá sujetarse a lo establecido por el artículo 163 que establece que el año fiscal para el Estado y los Municipios se contará del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año. Por tanto las facultades del Congreso son limitadas, máxime cuando no fundó ni motivó el Decreto impugnado y establece un impuesto exclusivo, esto es: privativo, prohibido por la Constitución Política del Estado, como se ha demostrado anteriormente al establecer las restricciones establecidas en el artículo 162 de la misma, por la Constitución Federal, como se comprueba plenamente con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia definida:"

"De acuerdo con el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero, que sea proporcional; segundo, que sea equitativo, y tercero que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la Constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnimoda para establecer las exacciones que, a juicio del Estado, fueran convenientes, sino una facultad limitada por esos tres requisitos".

"Tomo LXV.- Arrigunaga Peón Manuel de Pág. 2723.-
Tomo LXIX.- Cabezut Alberto M. y Coags.- Pág. 398.- Tomo ---
LXIX, Cabezut M. y Coags., pág. 5432.- Tomo LXXXIII, Bolaños García Fulgencio, pág. 813.- Tomo LXXV, Mora Manuel F., pág. 3603.- (Compilación del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXX, Pág. 1000)".

"Por tanto, al dar interpretación indebida a las disposiciones constitucionales que se han citado y al no acatar la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia, el Juez sentenciador falta a los más elementales principios de legalidad violándolos en nuestro agravio y en contravención de los artículos 14 y 16 Constitucionales".

"III.- El Decreto impugnado de inconstitucionalidad, expresa con toda claridad y precisión: "Se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos..." No cabe, en consecuencia, ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente".

"Mucho menos cabe la interpretación arbitraria que pretende darle el Juez "a quo", en el sentido de que se trata de un aumento de tasa sobre los impuestos. Por tanto el-



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

Decreto viola los más elementales principios de tributación-
y jamás se ha dado el caso de que las erogaciones, como son-
los impuestos gravados, sean motivo de tributación".

"Así pues, queda claro que el Decreto de que se tra-
ta, grava erogaciones y no percepciones, por lo que es a to-
das luces ilegal, injusto y monstruoso."

"Por tanto viola los principios de justicia y lega-
lidad consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales;
y el Juez al no tomar en consideración las razones y funda-
mentos en que basamos nuestra demanda de amparo, viola en --
nuestro agravio dichas garantías constitucionales".

TERCERO.- Debe declararse firme el primer punto re-
solutivo de la sentencia recurrida, por no existir agravios-
al respecto.

CUARTO.- Son infundados los agravios hechos valer-
por los recurrentes.

El Juez de Distrito considera justificadamente que
la fracción VII del artículo 3o. Constitucional se refiere -
a que la instrucción que imparta el Estado debe ser gratuita
para los educandos. En efecto, la garantía que otorga el ar-
tículo en cuestión no puede referirse sino a que la instruc-
ción que se imparta sea gratuita para las personas que concu-
rran a recibirla, pero a fin de prestar estos servicios se -
requiere efectuar erogaciones que, en el caso del Estado tie-
nen que provenir de los impuestos que pagan los individuos -
integrantes de la colectividad de que se trate.- Ahora bien;
resulta evidente que para hacer frente a los gastos señala-
dos el Estado tiene completas facultades para fijar impues-
tos con la proporción exigida en la Constitución por lo que-
resulta improcedente tratar de negarle esa facultad, como --
pretenden hacerlo los quejosos.

QUINTO.- En la primera parte del segundo agravio,

los recurrentes manifiestan que el Congreso del Estado carece de facultades para expedir el Decreto combatido en virtud de que modifica las disposiciones que autorizan al propio Congreso para fijar anualmente todas las bases para la administración pública del estado, teniéndose además en cuenta que el año fiscal corre del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

El agravio es infundado. El Juez de Distrito hizo el estudio del segundo concepto de violación, en el que los quejosos manifiestan que se viola en su perjuicio el artículo 163 de la Constitución Política del estado de Chihuahua, violándose con ello los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pero sin señalar los quejosos en que consistían dichas violaciones a los artículos de la Constitución Federal; a pesar de ello el Juez de Distrito en su sentencia consideró -- que no se violó la Constitución Local. El agravio respectivo, como se señaló anteriormente es insuficiente, porque en el mismo no se combaten adecuadamente los argumentos del Juez y, porque al igual que el concepto de violación relativo, tampoco señala en que consisten las violaciones a la Constitución Federal.

El agravio, en su segunda parte, también es infundado. En el caso a estudio no se rindió ninguna prueba idónea que demostrara que el impuesto adicional del 4% sea desproporcionado e inequitativo y que por tal motivo viole el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

En cuanto a que se considera como privativo y dedicado para un fin especial como es el sostenimiento de la Universidad del Estado, en el caso es aplicable la tesis jurisprudencial número 17 del último apéndice de Jurisprudencia que dice:

"LEYES PRIVATIVAS.- Es carácter constante de las-



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

leyes que sean de aplicación general y abstracta, (es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación y se aplique sin consideración de especie o de personas a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 Constitucional, y aún deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y en contra de la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional".

El Decreto impugnado reúne estos requisitos, de igualdad y generalidad como puede constatarse de su sola lectura:

"Artículo 2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos, que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.

Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional de 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua".

De la transcripción anterior se observa que el artículo en cuestión no carece de abstracción y generalidad, no pudiendo por tanto considerarse que tenga el carácter de privativo.

En cuanto a la aseveración hecha por los recurren-

tos de que en el caso se trata de un impuesto destinado únicamente y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, también en esta parte es infundado el agravio, ya que el mismo no viola la fracción IV, del artículo 31 Constitucional ~~por~~ la Jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Fundamental establece: "Son obligaciones de los mexicanos: ...IV/- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

Ahora bien, esa obligación tiene por objeto la satisfacción de los gastos públicos que el Estado debe cubrir en beneficio de la colectividad. Que con los impuestos deban cubrirse los gastos públicos no constituye una prohibición, para que el tributo, por ley del Congreso, se destine desde su origen a cubrir un gasto en especial, si es en beneficio de la colectividad y a ello está obligado el Estado. Si alguna prohibición contiene el precepto, no es otra que la de que el impuesto se destine a fines diferentes a los del gasto público, pero en el caso se destino al sostenimiento de la Universidad del Estado, que es un gasto público.

En consecuencia es correcta la consideración que al respecto hace el Juez de Distrito en su sentencia al referirse a la fracción IV del artículo 31 constitucional, ya que mientras el impuesto se destine a un gasto público, se estará cumpliendo con el mandato constitucional de destinar el impuesto a gastos de beneficio de la colectividad.

Este criterio fué sustentado en el amparo en revisión 4431/56, promovido por la Sección de Técnicos y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República, fallado el dieciséis de abril de -



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

mil novecientos setenta, por unanimidad de diecisiete votos de los Ministros: Alberto Orozco Romero, Carlos del Rio Rodríguez, Mario G. Rebolledo, Alberto Jiménez Castro, Manuel Rivera Silva, Ezequiel Burguete Farrera, Abel Huitrón y A., Rafael Rojina Villegas, Enrique Martínez Ulloa, Jorge Inárritu, Ernesto Solís López, Ramón Canedo Aldrete, María Cristina Salmorán de Tamayo, Manuel Yáñez Ruiz, Mariano Ramírez-Vázquez, Pedro Guerrero Martínez y Presidente Alfonso Guzmán Neyra.

SEXTO.- Es infundado el tercer agravio. El Juez de Distrito acertadamente razonó que con el Decreto impugnado no se gravan otros impuestos, sino que únicamente se aumenta la tasa de los existentes en un 4%. En efecto de la simple lectura del artículo 2106 transcrito en el Considerando Quinto de esta ejecutoria, y de la interpretación armónica de los dos párrafos del citado artículo se desprende que se trata de un ingreso ordinario que se establece con el carácter de impuesto adicional, o sea que no se gravan los otros impuestos, como lo pretenden los recurrentes, sino que los mismos son adicionados en un 4%, consistiendo por tanto simplemente en un aumento de los preexistentes, más de ninguna manera constituye un impuesto sobre los demás impuestos, por lo que el hecho generador del crédito fiscal continúa siendo el de cada uno de los impuestos anteriores adicionándose únicamente con el 4%.

Esta Suprema Corte de Justicia pronunció un fallo en igual sentido y con idénticos fundamentos en el Amparo en Revisión 7284/67, promovido por Antonio Leo G. y Coags., en la sesión del día doce de enero del año en curso por unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros: Guerrero López, del Rio, Rebolledo, Jiménez Castro, Rivera Silva, Burguete Farrera, Huitrón, Rojina Villegas, Saracho Alvarez,

Martínez Ulloa, Iñárritu, Canedo Aldrete, Salmorán de Tama-
yo, Yáñez Ruíz, Guerrero Martínez, Mondragón Guerra, Aguilar
Alvarez y Presidente Guzmán Neyra.

Por lo expuesto y con fundamento además, en los -
artículos 103, fracción I, 107, fracción VIII, inciso a) de
la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a) y 91 de
la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se declara firme el sobreseimiento res-
pecto al acto reclamado del Tesorero General del Estado de
Chihuahua, consistente en el refrendo del Decreto 293, expe-
dido por el Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia en la parte --
que se revisa.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni --
protege a Lino Flores Meraz, Pilar Garay Vda. de Balderrama,
Rosendo Valdez Mendoza, Elias Márquez Palacios, Ma. Guadalu-
pe Navarrete de Tarango, Herminia Coronel de Márquez, Ma. -
Acasia Zuviata de Valdez, Jesús Francisco Márquez Medrano,
Concepción Morales Castillo, Catalina Rivera de Portillo, ³
Dolores García Vda. de Piñon, Julia Mendoza de Anchondo, Ma.
de Jesús Fernández Vda. de Mendoza, Socorro Antiveros de Al-
faro, Benjamin Chico Flores, Carmen Muñoz de Chico, Candela
Márquez Ruíz, Juan González Delgado, Cipriano Hernández
Sosa, Manuel Márquez Medrano, Daniel Jaquez Márquez, Manuel
Granillo Aguilar, Emma Granillo Jaquez, Lorenzo Ramírez Re-
yes, Luis Tarango González, Alfredo Estrada Hernández, Li-
dia Gardea de Estrada, Benita Carbajal Vda. de Zuñiga, Ana-
Beltrán de Chavarria, Manuel Rodríguez Frescas, Oscar Adame,
Celiz, Jovita Adame Celiz, Modesto Chávez Soto, Carlos Te-
rrazas Fernández, Isidra Meza Vda. de Rodríguez, Teresa Gar-
cía de Loya, Manuela Ortiz de Irigoyen, Juliana Flores de -
Almodovar, Manuel Loya Ortiz, Adela Durán de Valenzuela, --

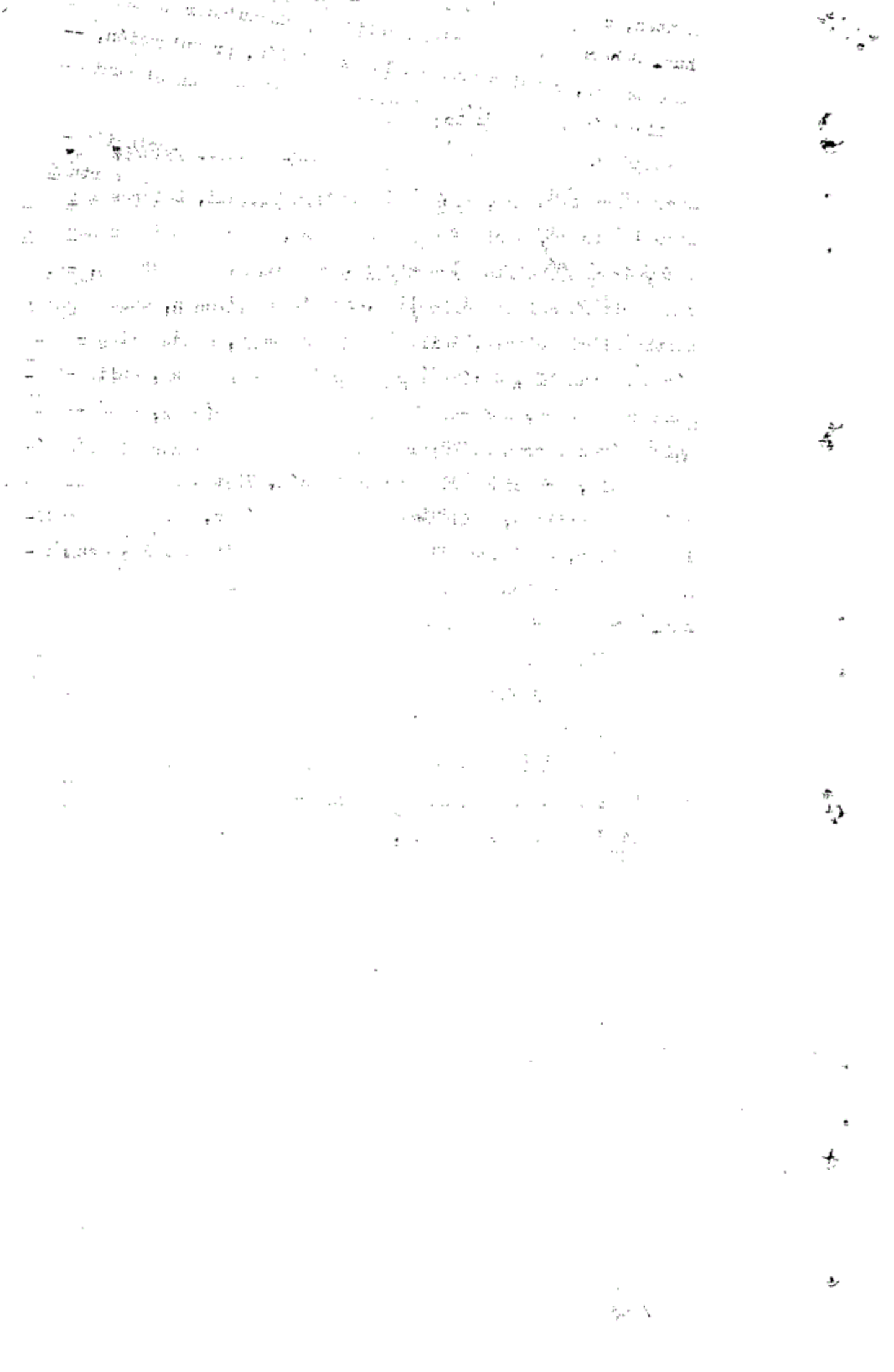


Amp. en Rev. 7319/57

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

Marcos Prieto Saenz, Alejandro Bonilla Villado, Dolores Mendoza de Arzaga, Carlota Loya de Romero, Pedro Fernández Mendoza, Jesús Granillo Estrada, Josefa Portillo de Estrada, - Canelario Ronquillo Molina, María Ruiz de Márquez, Manuel y Bertha Alicia Sigala, Guillermo Salas Arana, Jesús Elias - Márquez Granillo, José Dolores Hernández Caballero, Julia - Mendoza de Lara, Rosario Castelo Vda. de Rodríguez, José -- Luis Chávez Terrazas, Amparo Carrasco de Ramos, Eusebio López Angulo, Francisco C. Estrada Chacón, Victor Manuel Gutiérrez Santillan, Guillermo Machado Martínez, Samuel Padilla Aguilar, José Escalera Jiménez y Juventino Balderrama - Montez, contra los actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador de la misma Entidad y Recaudador de Rentas del Estado, consistentes en la expedición, promulgación, -- aplicación y ejecución del Decreto mencionado en el punto - anterior.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución - vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad archívese el expediente.





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

Amp.en Rev.

7319/967.

FORMA A-53

##nueve de febrero de mil novecientos setenta y uno, se dió cuenta con este asunto al Tribunal Pleno. La Secretaría dió lectura a los puntos - resolutivos del proyecto formulado por el señor Ministro Rebolledo, en el sentido de declarar - firme el sobreseimiento respecto al acto reclama- do del Tesorero General del Estado, confirmar la sentencia en la parte que se revisa y negar el amparo respecto de los demás actos y autori- dades.

Hicieron uso de la palabra los señores Ministros Guerrero López y Rebolledo. Este último manifestó su ausencia para que en el presente negocio y de ser iguales los agravios a los de amparo 7285/967, promovido por Oscar Hernández N. y coagraviados, fallado el dos del actual, se amplíe la parte considerativa en los términos de éste último. Con dicha adición por unanimidad de diecisiete votos se aprobó el proyecto; y el C. Presidente en funciones Mariano-Ramírez Vázquez hizo la declaratoria respectiva.

No asistieron los CC. Presidente Guzmán Neyra por haber tenido que asistir a una ceremonia oficial; los Ministros Rojina Villegas y Azuela, previo aviso, y del Río por estar haciendo uso de licencia.

lhs.

Amp. en Rev. Núm. 7319/967.- Promovido por Lino Flores Meraz y coagraviados, contra-
actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades.

ACUERDO PLENO del día 9 de febrero de 1971.

¿Se aprueban los puntos resolutivos del proyecto formulado por el señor Ministro
Rebolledo?

SI.

NO.

_____ / _____	GUERRERO LOPEZ	_____
_____ <u>En</u> _____	DEL RIO	<u>No asistió (por estar haciendo uso de licencia)</u>
_____ / _____	REBOLLEDO	_____
_____ / _____	JIMENEZ CASTRO	_____
_____ / _____	RIVERA SILVA	_____
_____ / _____	BURGUETE	_____
_____ / _____	HUITRON	_____
_____ / _____	ROJINA VILLEGAS	<u>No asistió.</u>
_____ / _____	SARACHO ALVAREZ	_____
_____ / _____	MARTINEZ ULLOA	_____
_____ / _____	INARRITU	_____
_____ / _____	AZUELA	<u>No asistió.</u>
_____ / _____	SOLIS LOPEZ	_____
_____ / _____	CANEDO	_____
_____ / _____	SALMORAN DE TAMAYO	_____
_____ / _____	YANEZ	_____
_____ / _____	RAMIREZ VAZQUEZ	<u>(Presidente en funciones)</u>
_____ / _____	GUERRERO MARTINEZ	_____
_____ / _____	MONDRAGON GUERRA	_____
_____ / _____	AGUILAR ALVAREZ	_____
_____ / _____	GUZMAN NEYRA	<u>No asistió (por haber asistido a una ceremonia oficial)</u>

Unanimidad de 17 votos.



AMPARO EN REVISION 7319/67
LINO FLORES MERAZ Y COMPS.

MINISTRO PONENTE: LIC. MARIO G. REBOLLEDO.
SECRETARIO: LIC. ISIDRO GUTIERREZ GONZALEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal -
Pleno, correspondiente al día nueve de febrero de mil nove-
cientos setenta y uno.

V I S T O S ; y

R E S U L T A N D O : A

PRIMERO.= Por escrito presentado el veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y siete, ante el Juez de -
Distrito en Chihuahua, Lino Flores Meraz, Pilar Garay Vda. -
de Balderrama, Rosendo Valdez Mendoza, Elias Márquez Palacios,
María Guadalupe Navarrete de Tarango, Herminia Coronel de -
Márquez, María Acasia Zuviata de Valdez, Jesus Francisco Már-
quez Medrano, Concepción Morales Castillo, Catalina Rivera-
de Portillo, Dolores García Vda. de Piñon, Julia Mendoza de
Anchondo, María de Jesus Fernández Vda. de Mendoza, Socorro
Antiveros de Alfaro, Benjamin Chico Flores, Carmen Muñoz de
Chico, Candelaria Márquez Ruiz, Juan González Delgado, Ci-
priano Hernández Sosa, Manuel Márquez Medrano, Daniel Jaquez
Marquez, Manuel Granillo Aguilar, Emma Granillo Jaquez, Lo-
renzo Ramírez Reyes, Luis Tarango González, Alfredo Estrada
Hernández, Lidia Gardea de Estrada, Benita Carbajal Vda. de
Zuñiga, Ana Beltrán de Chavarria, Manuel Rodríguez Frescas,
Oscar Adame Celiz, Jovita Adame Celiz, Modesto Chávez Soto,
Carlos Terrazas Fernández, Isidra Meza de Rodríguez, Teresa
García de Loya, Julian Márquez Marrufo, Sixto Irigoyen Loya,
Manuela Ortiz de Irigoyen, Juliana Flores de Almodovar, Ma-
nuel Loya Ortiz, Adela Durán de Valenzuela, Marcos Prieto -
Saenz, Alejandro Bonilla Villado, Dolores Mendoza de Arzaga,

Carlota Loya de Romero, Pedro Fernández Mendoza, Jesús Granillo Estrada, Josefa Portillo de Estrada, Candelario Ronquillo Molina, María Ruiz de Márquez, Manuel y Bertha Alicia Sigala, Guillermo Salas Arana, Jesús Elias Márquez Granillo, José Dolores Hernández Caballero, Julia Mendoza de Lara, -- Rosario Castelo Vda. de Rodríguez, José Luis Chávez Terrazas, Amparo Carrasco de Ramos, Eusebio López Angulo, Francisco C. Estrada Chacón, Victor Manuel Gutiérrez Santillan, Guillermo Machado Martínez, Samuel Padilla Aguilar, José Escalera Jiménez y Juventino Balderrama Montez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador de la misma entidad, Tesorero General del Estado y Recaudador de Rentas de Chihuahua; actos que hicieron consistir:

"Del H. Congreso del Estado, reclamamos la expedición del Decreto Núm. 293, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 17 del mes de junio último y que ha entrado en vigor a partir del día primero del mes en curso, estableciendo un impuesto adicional SOBRE TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, y cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- Del C. Gobernador del Estado, reclamamos la firma y promulgación del Decreto citado.- Del C. Tesorero General del Estado, reclamamos el refrendo y actos de ejecución del Decreto. Del C. Recaudador de Rentas, los actos de su ejecución".

Señalan como garantías violadas las que consagran los artículos 30., 14 y 16 de la Constitución Federal.

SEGUNDO.- Relatan los quejosos como antecedentes, los que a continuación se transcriben:

"1o.- Los quejosos causantes de impuestos al Estado que debían pagar a la Recaudación de Rentas, el



"1o.- Los suscritos somos causantes de impuestos al Estado que debemos pagar en la Recaudación de Rentas, como lo comprobamos con los anexos que acompañamos.-2.º La Ley de Egresos del Estado de fecha 31 de diciembre de 1966, fija la distribución que debefá darse a los impuestos que deberán recaudarse durante el año de 1967; y en esa Ley se señala en su partida 217, fracciones 4 y 5, la suma de \$ 4,630.000, para la Universidad de Chihuahua, que este Organismo recibirá durante el año en curso.-3.º Pero en el Núm. 48 del Periódico Oficial del Estado, de fecha 17 de junio último, se publicó el decreto Núm. 293 expedido por el Congreso del Estado, estableciendo un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios, derechos y productos a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, para aplicar su rendimiento, única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- La vigencia de este Decreto, es a partir del día primero del mes en curso."

TERCERO.- Los quejosos formularon como conceptos de violación los siguientes:

"I.- El decreto impugnado, viola en nuestro agravio la Fracción VII del Artículo 3o. Constitucional, que establece que la educación que imparta el Estado, será gratuita; en consecuencia, no puede afectarse a los causantes de impuestos, con alguno que específicamente debe aplicarse a la educación que el Estado imparta".

"Por tanto, el Congreso del Estado, al crear el impuesto del 4% específicamente para destinarlo EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, viola lo dispuesto por el artículo 3o. de la Constitución Política Mexicana, en su fracción VII y viola en nuestro perjuicio

Amp. en Rev. 7319/67

cio la garantía de legalidad que nos conceden los artículos 14 y 16 Constitucionales".

"II.- El Congreso del Estado viola en nuestro -- agravio el artículo 64, fracción VI de la Constitución Política del Estado, que dice literalmente: "Art. 64.-Son atribuciones del Congreso:... VI.- Fijar anualmente todos los gastos de la Administración Pública del Estado, previo examen del presupuesto que presente el Ejecutivo"; y viola en nuestro perjuicio el artículo 163 de la misma Constitución, que establece categóricamente: "Art. 163.-El año Fiscal para el Estado y los Municipios, se contará del primero de -- enero al treinta y uno de diciembre de cada año". Ahora -- bien, si el Congreso del Estado, mediante Decreto Núm. 266- de 31 de enero de 1966, fijó los gastos para el año que -- sa, al fijar nuevos gastos, sin tener facultades para ello y -- contraviniendo los sistemas procesales en materia hacende- -- ria, viola en nuestro agravio los artículos 14 y 16 Consti- -- tucionales".

"III.- El Congreso del Estado, en el Decreto que -- se estudia, viola en nuestro agravio los principios de pro- -- porción y equidad, puesto que grava no PERCEPCIONES, sino -- EROGACIONES, como son los impuestos gravados por el mismo -- Decreto. No conocemos, hasta ahora, ley alguna que establez- -- ca que las erogaciones son sujetos de impuestos. Esto cong- -- tituye un rompimiento con la técnica de tributación, pues -- todo impuesto nace de un bien o un servicio prestados por -- el Estado y recibido por el causante; pero es absurdo que -- un impuesto cause otro impuesto, o sea que una erogación re- -- sulte gravable, como en el caso que nos ocupa. Por tanto el -- Decreto carece de equidad y viola el artículo 31, fracción -- IV de la Constitución General de la República, siendo apli- -- cable la Tesis Jurisprudencial que dice textualmente: "Si -- bien



amp, en Rev. 7319/67

bien el artículo 31 Constitucional que establece los requisitos de proporción y equidad del impuesto como derechos de un contribuyente, no está en el Capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de ese derecho es una violación de esas garantías. (Sem. Jud. de la Fed. Tomo XX, Pág. 930 y Tomo XXI, Págs. 950 y 2035)."

"IV.- El Gobernador del Estado, al firmar y promulgar el Decreto Núm. 293 que crea un impuesto SOBRE TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS, ~~para~~ aplicarlo única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos concede los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que sus actos carecen de fundación y motivación."

"V.- El C. Tesorero General del Estado, por las razones que se han dejado expuestas, al refrendar el decreto de que se trata, exigiéndonos obligaciones creadas por el mismo Decreto, viola en nuestro perjuicio la citada garantía de legalidad".

"VI.- Finalmente, el Recaudador de Rentas, al ordenar se exija el cumplimiento de las obligaciones nacidas de un Decreto que grava TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS, con un 4% destinado única y exclusivamente a la Universidad de Chihuahua, viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos conceden los artículos 14 y 16 Constitucionales".

CUARTO.- El Juez de Distrito admitió la demanda por auto de veintiocho de julio de mil novecientos sesenta y siete, registrándola con el número 216/67, y seguido el juicio por sus trámites legales dictó sentencia el quince de agosto del mismo año, con los siguientes puntos resolutivos:

"Primero.- Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por Lino Flores Meraz y coagraviados res-

pecto al refrendo del Decreto Núm. 293 que reclaman del C. Tesorero General del Estado".

"Segundo.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lino Flores Meraz y Coags., contra actos que reclaman del H. Congreso del Estado, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas, consistentes en la expedición, promulgación, aplicación y ejecución del mencionado Decreto".

"Tercero.- Notifíquese".

La sentencia se apoya en las siguientes consideraciones:

"Los anteriores conceptos de violación son infundados".- En efecto, el decreto impugnado adicionó los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo del Estado, para quedar como sigue: "2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público con este mismo carácter se establece un impuesto adicional de 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento.- Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el enterode los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua". De la simple lectura de los artículos transcritos se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravámen o retribución por la educación univer



Amp. en Rev. 7319/67

sitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir en el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31, fracción IV, ya que es indudable que tiene este carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el artículo 30. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 de la Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación editado en 1965. En estas condiciones el decreto reclamado no es violatorio de los artículos 30., fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".

"En cuanto al segundo concepto de violación, tampoco es fundado, ya que la expedición del decreto impugnado, fue hecha por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64, fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado, que establecé,-

respectivamente, que son atribuciones del Congreso del Estado, legislar en todo lo concerniente al régimen interior - del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones - necesarias para su gobierno y administración, en todos los - ramos que uno y otra comprenden, fijar anualmente todos los - gastos de la Administración pública y expedir las disposicio - nes hacendarias que establezcan las contribuciones necesaa - rias para los gastos públicos y que podrá variarlas o modi - ficarlas en vista del presupuesto de egresos. El artículo - 2106 del Código Administrativo del Estado establece que son - ingresos ordinarios aquellos que se obtienen normalmente - para la atención de los gastos públicos; como el sosteni - miento de la Universidad tiene ese carácter, es evidente - que la Legislatura local está facultada legalmente para fi - jar el impuesto adicional de referencia. Por lo anterior - se estima que los actos que se reclaman de la Legislatura - local no violan los preceptos citados ni las garantías indi - viduales consagradas por los artículos 14 y 16 de la Consti - tución Federal".

El tercer concepto de violación es igualmente in - fundado. Los quejosos sostienen que el decreto en estudio - viola los principios de proporción y equidad porque "grava - no percepciones, sino erogaciones, como son los impuestos - gravados por el mismo decreto". No es verdad lo anterior - porque el impuesto no grava los otros impuestos sino que ú - nicamente aumenta la tasa de los previamente establecidos y , como dicho aumento es del 4% para todos queda la misma pro - porción, pues los que pagaban cien pesos, pagarán ciento -- cuatro pesos y los que tenían impuestos por un mil pesos + tendrán que pagar mil cuarenta pesos, o sea, que el aumento es proporcional y equitativo porque pone a todos los contri



buyentes en la misma situación, por lo que no es violatorio del artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. La Tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita no es aplicable en la especie porque no apoya los conceptos de violación ni está relacionada con la cuestión planteada."

"Respecto de los actos que se hacen consistir en la expedición, promulgación, refrendo, aplicación y ejecución del decreto, solamente cabe agragar que no siendo inconstitucional el decreto por las consideraciones expuestas con anterioridad tampoco lo son dichos actos, porque no se impugnan por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del contenido del decreto".

"Como consecuencia de todo lo anterior se estima que los actos reclamados no son violatorios de los artículos 30., 14, 16 y 31 de la Constitución Federal por lo que corresponde negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan los quejosos".

QUINTO.- Inconformes con la sentencia anterior, los quejosos interpusieron recurso de revisión, mismo que les fue admitido por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia con fecha veintidos de septiembre de mil novecientos sesenta y siete.

El Agente del Ministerio Público Federal designado para intervenir en este asunto, formuló pedimento en el sentido de que se confirme la sentencia recurrida.

Por acuerdo del propio Presidente de este Alto Tribunal de once de enero de mil novecientos sesenta y ocho, se mandó turnar el presente asunto para su estudio al Ministro Relator.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente pa-

ra conocer del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 11, fracción IV Bis, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de -- que se interpuso en contra de una sentencia dictada por -- Juez de Distrito, en un juicio de amparo en el que se con-- trovierte la constitucionalidad del Decreto número 293, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua del día diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y siete, en el que se establece un impuesto adicional sobre los im-- puestos ordinarios, derechos y productos a que se refiere -- el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado de -- Chihuahua.

SEGUNDO.- En el escrito de revisión se expresan -- los siguientes agravios:

"1o.- El Juez "a quo", en el Cuarto Considerando de la sentencia recurrida, dice a la letra:

"Los anteriores conceptos de violación, son infundados. En efecto, el decreto impugnado adiciona los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo en el Estado, para quedar como sigue:- "2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del -- gasto público.- Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales -- públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento.- Los ingresos que -- le correspondan percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el entero de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se -- concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua". De la simple lectura de los artículos transcritos, -- se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de



que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir con el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al -- adicionar el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de -- Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución -- en su artículo 31, fracción IV, ya que es indudable que tiene ese carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el artículo 30. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la -- Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 de la Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, editado en 1965. En estas condiciones el Decreto reclamado no es violatorio de los artículos 30., -- fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".

"Las anteriores consideraciones del "a quo", son incongruentes y contradictorias puesto que, sin que aparezca el Decreto impugnado ni una sombra, siquiera, de que el 4% que grava TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS Y DERECHOS para

destinarlo UNICA Y EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la --
Universidad de Chihuahua, sea un aumento de taza, la senten-
cia recurrida así lo declara enfáticamente y afirma que ese
aumento de taza, como piadosamente lo denomina, no grava la
instrucción universitaria, puesto que, para que tal cosa --
ocurriera, sería necesario que el tributo recayera sobre --
las personas que concurren a la Universidad a recibir la --
instrucción universitaria. Este argumento nos llevaría a --
la conclusión de que en los colegios de paga, la instrucción
resulta gratuita, debido a que, como los alumnos, por su na-
tural dependencia económica, no hacen los pagos de sus cole-
giaturas, la instrucción que reciben no es a título oneroso".

"Como queda demostrado, el impuesto impugnado ha-
sido creado con el exclusivo fin de sostener a la Universi-
dad de Chihuahua, en su misión educadora, con detrimento de
los causantes de dicho impuesto y en contravención del artí-
culo 3o. Constitucional que establece categóricamente que --
la instrucción que imparta el Estado debe ser gratuita. Por
tanto éste debe ajustarse a sostener a la Universidad en la
forma y términos que la Ley de Egresos del Estado en su Par-
tida 217 fracciones IV y V señala, que destina para la Uni-
versidad la suma de \$4,630.000.00, sin que dicha partida pue-
da modificarse, sino con cargo a los gastos públicos y de --
acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educa-
ción Pública, reglamentaria del artículo 3o. Constitucional.
Tal disposición legal establece, entre otras condiciones, la
capacidad del presupuesto y no faculta al Estado para fijar
impuesto alguno para el sostenimiento específico de los cen-
tros educativos superiores; en consecuencia, el Juez a quo,
al no tomar en consideración lo establecido por el precepto
Constitucional invocado, viola en agravio de los quejosos el
principio de legalidad garantizado por los artículos 14 y 16



Constitucionales".

"II.- La sentencia recurrida establece que el segundo concepto de violación es infundado, pretendiendo que la expedición del Decreto impugnado fué expedido por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64, fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado. Tal apreciación es inexacta, porque si bien es cierto que la fracción I del artículo 64 da facultades al Congreso para legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su Gobierno y administración, también es cierto que la fracción VI del mismo artículo, sólo faculta al Congreso para fijar anualmente todas las bases para la administración pública del Estado + PREVIO EXAMEN DEL PRESUPUESTO que presente el Ejecutivo; el artículo 162 invocado por el a quo, faculta al Congreso para expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos, EN VISTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, el cual no está facultado para modificar; además deberá sujetarse a lo establecido por el artículo 163 que establece que el año fiscal para el Estado y los Municipios se contará del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año. Por tanto las facultades del Congreso son limitadas, máxime cuando no fundó ni motivó el Decreto impugnado y establece un impuesto exclusivo, esto es: privativo, prohibido por la Constitución Política del Estado, como se ha demostrado anteriormente al establecer las restricciones establecidas en el artículo 162 de la misma, por la Constitución Federal, como se comprueba plenamente con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia definida:"

"De acuerdo con el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero, que sea proporcional; segundo, que sea equitativo, y tercero que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la Constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnimoda para establecer las exacciones que, a juicio del Estado, fueran convenientes, sino una facultad limitada por esos tres requisitos".

"Tomo LXV.- Arrigunaga Peón Manuel de Pág. 2723.- Tomo LXIX.- Cabezut Alberto M. y Coags.- Pág. 398.- Tomo --- LXIX, Cabezut M. y Coags., pág. 5432.- Tomo LXXXIII, Bolaños García Fulgencio, pág. 813.- Tomo LXXV, Mora Manuel F., pág. 3603.- (Compilación del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXX, Pág. 1000)".

"Por tanto, al dar interpretación indebida a las disposiciones constitucionales que se han citado y al no acatar la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia, el Juez sentenciador falta a los más elementales principios de legalidad violándolos en nuestro agravio y en contravención de los artículos 14 y 16 Constitucionales".

"III.- El Decreto impugnado de inconstitucionalidad, expresa con toda claridad y precisión: "Se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos..." No cabe, en consecuencia, ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente".

"Mucho menos cabe la interpretación arbitraria que pretende darle el Juez "a quo", en el sentido de que se trata de un aumento de tasa sobre los impuestos. Por tanto el-



Amp. en Rev. 7319/67

decreto viola los más elementales principios de tributación y jamás se ha dado el caso de que las erogaciones, como son los impuestos gravados, sean motivo de tributación."

"Así pues, queda claro que el Decreto de que se trata, grava erogaciones y no percepciones, por lo que es a todas luces ilegal, injusto y monstruoso."

"Por tanto viola los principios de justicia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y el Juez al no tomar en consideración las razones y fundamentos en que basamos nuestra demanda de amparo, viola en nuestro agravio dichas garantías constitucionales."

TERCERO.- Debe declararse firme el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, por no existir agravios al respecto.

CUARTO.- Es infundado el primero de los agravios que los recurrentes hacen valer. En este agravio se sostiene substancialmente, en su primera parte, que las consideraciones del Juez de Distrito son incongruentes y contradictorias, porque sin que aparezca en el decreto que se reclama que el impuesto adicional sea un aumento en la tasa de los impuestos ya establecidos, el juzgador lo declara enfáticamente en su sentencia, afirmando además que no grava la instrucción universitaria, cuando está plenamente demostrado que el tributo en cuestión está destinado al sostenimiento de la Universidad en su misión educadora y que por tal motivo se Contraviene el artículo 3o. de la Constitución Federal en que se dispone que la educación que imparte el Estado será gratuita.

No existe la contradicción que se atribuye al Juez de Distrito en los argumentos que fundan lo que apare-

Amp. en Rev. 7319/67

ce como primer considerando de su sentencia. Los quejosos -- en el primer concepto de violación que hacen valer en su -- demanda, sostienen en esencia que el decreto que impugnan es violatorio de la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal que establece que la educación que imparta el Estado será gratuita; que por lo tanto, no pueden establecerse impuestos como el que se reclama, destinados al sostenimiento de la Universidad del Estado de Chihuahua, sin violar dicho precepto Constitucional. El Juez a quo, al analizar -- este concepto de violación, lo estima infundado, considerando que conforme al artículo 2106 del Código Administrativo -- del Estado, que crea el impuesto de 4%, no se está gravando -- en forma alguna la instrucción universitaria, pues el tributo no recae sobre los que acuden a la universidad para recibir instrucción, sino sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que realicen, ya calificadas por el -- Estado y a quienes se les adicionen los impuestos que ya pagaban con el de nueva creación para el sostenimiento de la -- universidad, que es un gasto público al que debe contribuir el particular. En la consideración que se resume, no puede haber ni hay contradicción porque, en efecto, el impuesto que se combate no es un impuesto por recibir educación; consecuentemente, no se Contraviene el mandato constitucional de que la educación se imparta en forma gratuita por el Estado. El precepto que lo establece lo considera, según los términos del artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, como un ingreso ordinario que se destina a la atención del gasto público y lo adiciona a los impuestos ordinarios y derechos con que tributan los diversos causantes en las actividades -- que, como dice el Juez de Distrito, ya fueron calificadas --



Amp. en Rev. 7319/67

por la Hacienda Local. Se trata de un contribución al gasto público que va a satisfacer las necesidades de la colectividad para un fin específico como es la educación que el Estado otorga a la juventud, para el desarrollo cultural, social y económico de la propia entidad y, por ende, de la Nación Mexicana.

Ahora bien, si se trata de un gasto público que debe satisfacerse con la contribución de todos los habitantes de Chihuahua, el hecho de que el Estado fije en una ley un tributo, para sostener dicho gasto público, no implica, por la circunstancia de que se precise cual va a ser el destino de ese tributo, que se está cobrando la educación, y en este caso resulta acertada la consideración del Juez de Distrito que, para que tal cosa sucediera, se requeriría que ese tributo recayera sobre el educando, ya que entonces sí se haría nugatorio el mandato constitucional de impartir -- gratuitamente la enseñanza.

En su segunda parte el agravio se refiere a que el Estado debe sujetarse a la partida 217, fracción IV y V de la Ley de Egresos del propio Estado, que destina para la Universidad \$ 4,630.000.00 anuales, sin que dicha partida puede modificarse sino con cargo a los gastos públicos y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria del artículo 3o. Constitucional. Que esta disposición legal no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los centros educativos superiores. Como se ve en esta segunda parte del agravio se vuelve a impugnar el decreto número 293 por las mismas causas ya invocadas, o sea la pretendida opo

Amp. en Rev. 7319/67

sición a los mandatos del artículo 3o. Constitucional y no recurre a un concepto de ilegalidad al citar el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, sin parar mientes en que, según lo dispuesto en el artículo 2o. de la propia Ley, este Ordenamiento no se aplica a las universidades dependientes de las entidades federativas, amén de que el citado artículo 23 no prohíbe la existencia de un impuesto adicional como el mencionado. El carácter de exclusividad del referido impuesto adicional de 4% sólo se menciona como un calificativo al mismo, sin que sea propiamente objeto del agravio.

Por lo demás, la ley que se combate en este amparo, adiciona, en efecto, los impuestos en general cuyas bases y tarifas están determinadas por las leyes en particular y las aumenta en un 4% sin que haya precepto constitucional que se lo impida, porque frente a la obligación del particular de contribuir al gasto público, está la facultad del Estado de imponer las contribuciones necesarias para satisfacer los gastos públicos y si como se dejó establecido, el impuesto adicional no tiene el carácter de un impuesto a la educación porque no gravita sobre los educandos, es evidente que el Estado, frente a las necesidades y fines que constituyen su esencia puede establecer un impuesto para -- destinarlo a un gasto público especial.

En consecuencia, la sentencia del Juez de Distrito se ajustada la realidad tributaria y a los principios constitucionales que en el caso no se contravienen.

QUINTO.- El segundo agravio también resulta infundado por las siguientes razones.

Los recurrentes afirman que es inexacta la apre--



Amp. en Rev. 7319/67

ciación hecha por el Juez de Distrito, al declarar infundado el segundo concepto de violación, al considerar en su -- sentencia que el "Congreso del Estado expidió el Decreto -- que se impugna en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado", alegando dichos recurrentes, que si --- bien es cierto que el referido artículo 64 faculta al Con-- greso para legislar en todo lo concerniente al Régimen in-- terior del Estado; también lo es que la fracción VI del pro-- pio artículo solo lo faculta para fijar anualmente las ba-- ses para la administración pública, previo examen del pre-- supuesto que presente el Ejecutivo; por lo que consideran -- los recurrentes que con ello se viola el mencionado artícu-- lo 162 y en consecuencia los artículos 14 y 16 de la Consti-- tución Federal, pero sin señalar en que consisten dichas vio-- laciones al Pacto Federal.

El agravio es infundado ya que sus argumentos no-- son operantes para modificar las consideraciones del juzga-- dor, en virtud de que los recurrentes confunden en sus ale-- gaciones el acto de expedir leyes fiscales, (o de cualquier otra índole) que se estimen necesarias para el régimen in-- terior del Estado, con la facultad de aprobar el presupues-- to de egresos: facultad que no puede constituir un obstácu-- lo para que el Congreso Legisle expida las leyes que consi-- dere necesarias; no quedando por lo tanto limitada su facul-- tad legislativa, ni debiendo entremezclarse o confundirse un acto con otro.

Por lo anterior el Juez de Distrito obró correctamen-- te al considerar en su sentencia que no existen violacio-- nes a la Constitución Local, pues como quedó demostrado el--

Amp. en Rev. 7319/67

Congreso del Estado de Chihuahua tiene facultades para legislar en todo lo que concierne al régimen interior del Estado, con la salvedad de aquellas materias reservadas por la Constitución Federal para el Congreso de la Unión, no comprendiéndose en esta las referidas a impuestos para fines educativos, ni la modificación de los presupuestos de egresos estatales.

De acuerdo con dicha facultad la Legislatura del Estado expidió el Decreto que se reclama, mismo que como se demostró no es violatorio de los artículos 3o., 14 y 16 de la Carta Fundamental, y si la creación de ese impuesto modifica el Presupuesto de Egresos expedido para el año de 1966, tal modificación no convierte a la Ley en inconstitucional, toda vez que fué expedida por el órgano constitucionalmente autorizado. Podrá ser antitécnico que se modifique el Presupuesto durante el año de 1966; pero no es inconstitucional, ya que no se puede sostener válidamente como pretenden hacerlo los recurrentes, que la aprobación del Presupuesto de Egresos para un año determinado sea un impedimento para que el Congreso legisle en materia de impuestos. Tal presupuesto de Egresos no puede tener, en materia de gastos, la rigidez que se pretende en el agravio que se estudia, pues siendo los fines del Estado resolver todos los problemas que afecten a la administración pública y a la colectividad no se le puede limitar para que por conducto del órgano respectivo dicte todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de esos fines.

El agravio, en su segunda parte, también es infundado, en cuanto sostienen los recurrentes que el impuesto es desproporcional e inequitativo y que por tal motivo vio-



Amp. en Rev. 7319/67

la el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal.

En el caso a estudio la capacidad contributiva de los causantes quejosos está en relación con la de los demás causantes, lo cual se aprecia de la lectura de la ley reclamada; existiendo una perfecta distribución de la carga fiscal entre todos los causantes que se encuentran en los mismos presupuestos de la norma en estudio ya que la aplicación a todos los causantes con una tasa igual del ~~4~~ en relación a los impuestos que proporcionalmente ya les han sido fijados por otros conceptos, lo que demuestra que no tiene las características de inconstitucionalidad que se le pretende imputar. En cuanto a que se considere como privativo por dedicarse a un fin especial como es el sostenimiento de la Universidad del Estado, debe decirse que aplicando la tesis jurisprudencial número 17 del último Apéndice de jurisprudencia, no tiene tal carácter de la Ley privativa. La tesis de referencia sostiene lo siguiente: "LEYES PRIVATIVAS.- Es carácter constantes de las leyes que sean de aplicación general y abstracta (es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso -- previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación y se aplique sin consideración de especie o de personas a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas). Una Ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 Constitucional, y aún deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas Leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de-

Amp. en Rev. 7319/67

generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y en contra de la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional."

El decreto impugnado, reúne estos requisitos, de generalidad e igualdad, como puede constatarse de su sola lectura:

"Artículo 2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos, que se obtienen normalmente para la atención -- del gasto público.

Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional de 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua."

De la transcripción anterior se observa que el artículo en cuestión no carece de abstracción y generalidad, no pudiendo por tanto considerarse que tenga el carácter de privativo.

SEXTO.- En el tercer agravio sostienen los recurrentes que en la redacción del decreto impugnado en la parte que dice: "se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos...." no cabe ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente pues sostienen que el impuesto se fija sobre otros impuestos. El agravio es infundado puesto que como acertadamente lo hace notar el Juez de Distrito con el decreto impugnado no se gravan otros impuestos, ya que si así fuera, quien debería pagar los sería el Estado, sin que sufrieran perjuicio alguno los recurrentes. Las leyes deben interpretarse fundamente según su espíritu y no apegarse a la letra pues si de la



Amp. en Rev. 7319/67

simple lectura del artículo 2106, transcrito en el considerando quinto de esta ejecutoria, pudiera suponerse que se gravan otros impuestos, con una interpretación armónica de los dos párrafos del citado artículo y con un simple razonamiento de sentido común, se desprende que se trata de un ingreso ordinario que se establece como impuesto adicional, o sea que no se gravan los otros impuestos, sino que los mismos se adicionan en un 4%, consistiendo por tanto en un aumento simple a los pre-existentes y de ninguna manera en un impuesto sobre todos los demás impuestos, por lo que el hecho generador del crédito fiscal es el mismo ya establecido en cada uno de los impuestos anteriores, adicionando únicamente con el 4%.

SEPTIMO.- Conviene insistir en que solo por lo que ve al carácter que atribuyen los recurrentes en su primer ^{órgano} ~~órgano~~ al impuesto, de ~~ser~~ contrario al artículo 3o. Constitucional se alega en el aspecto exclusivo que contiene al destinarlo expresamente para el sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.

Doctrinariamente es sabido que según el fin del impuesto, se pueden presentar tres casos: el primero en que el impuesto tiene fines fiscales y se destina a cubrir los gastos generales del Estado.

El segundo en que el impuesto tiene un fin fiscal, pero se aplica a ciertos gastos especiales, que es lo que ocurre en el presente caso y, por último, en el tercero en que el impuesto tiene fines extra-fiscales.

El artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Fundamental establece: "Son obligaciones de los mexicanos: IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación-

Amp. en Rev. 7319/67

como del Estado y Municipio en que residan, de la manera -
proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Ahora bien, esa obligación tiene por objeto la -
satisfacción de los gastos públicos que el Estado debe cu-
brir en beneficio de la colectividad. Que con los impues-
tos deban cubrirse los gastos públicos no constituye una -
prohibición, para que el tributo, por la ley del Congreso, -
se destine desde su origen a cubrir un gasto especial, si-
es en beneficio de la colectividad y a ello está obligado-
el Estado. Si alguna prohibición contiene el precepto, no
es otra que la de que el impuesto se destine a fines dife-
rentes a los del gasto público, pero en el caso se destinó
al sostenimiento de la Universidad del Estado, que es un -
gasto público.

En consecuencia es correcta la consideración que
al respecto hace el Juez de Distrito en su sentencia al re-
ferirse a la fracción IV del artículo 31 Constitucional, -
ya que mientras el impuesto se destine a un gasto público,
se estará cumpliendo con el mandato constitucional de apli-
car el impuesto a gastos en beneficio de la colectividad.

Este criterio fué sustentado en el amparo en re-
visión 4431/56, promovido por la Sección de Técnicos y Ma-
nuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cine-
matográfica de la República, fallado el dieciséis de abril
de mil novecientos setenta, por unanimidad de diecisiete -
votos de los Ministros: Alberto Orozco Romero, Carlos del-
Río Rodríguez, Mario G. Rebolledo, Alberto Jiménez Castro,
Manuel Rivera Silva, Ezequiel Burguete Farrera, Abel Hui-
trón y A., Rafael Rojina Villegas, Enrique Martínez Ulloa,



Amp. en Rev. 7319/67

Jorge Iñárritu, Ernesto Solís López, Ramón Canedo Aldrete, Ma. Cristina Salmorán de Tamayo, Manuel Yáñez Ruíz, Mariano Ramírez Vázquez, Pedro Guerrero Martínez y Presidente Alfonso Guzmán Neyra.

Como un precedente que es muy importante señalar debe citarse lo resuelto por ese H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo 7284/67 en la sesión del 12 de enero de 1971 por unanimidad de votos de los señores Ministros: Euquerio Guerrero, Carlos del Río Rodríguez, Mario G. Rebolledo, Alberto Jiménez Castro, Manuel Rivera Silva, Ezequiel Burguete Farrera, Abel Huitrón y Aguado, Rafael Rojina Villegas, Jorge Saracho Alvarez, Enrique Martínez Ulloa, Jorge Iñárritu, Ramón Canedo Aldrete, María Cristina Salmorán de Tamayo, Manuel Yáñez Ruíz, Pedro Guerrero Martínez, Salvador Mondragón Guerra, Ernesto Aguilar Alvarez y Presidente Alfonso Guzmán Neyra, pues en tal juicio de amparo: la demanda, la sentencia del Juez y el escrito de expresión de agravios son IDENTICOS con el cambio natural de nombres de los quejosos y fecha, habiéndose negado el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos.

Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 163 fracción I, 107, fracciones VIII inciso á) de la Constitución Federal; 84 fracción I inciso a), 90 y 91 de la Ley Orgánica, se resuelve:

PRIMERO.- Se declara firme el sobreseimiento respecto al acto reclamado del Tesorero General del Estado de Chihuahua consistentes en el refrendo del decreto 293, expedido por el Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia en la parte

Amp. en Rev. 7319/67

que se revisa.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni --
protege a Lino Flores Meraz, Pilar Garay Vda. de Balderra-
ma, Rosendo Valdez Mendoza, Elias Márquez Palacios, María -
Guadalupe Navarrete de Tarango, Herminia Coronel de Márquez,
María Acasia de Valdez, Jesus Francisco Márquez Medrano, --
Concepción Morales Castillo, Catalina Rivera de Portillo, -
Dolores García Vda. de Piñón, Julia Mendoza de Anchondo, Ma-
ría de Jesus Fernández Vda. de Mendoza, Socorro Antiveros -
de Alfaro, Benjamín Chico Flores, Carmen Muñoz de Chico, -
Candelaria Márquez Ruíz, Juan González Delgado, Cipriano --
Hernández Bosa, Manuel Márquez Medrano, Daniel Jáquez Mar--
quez, Manuel Granillo Aguilar, Emma Granillo Jáquez, Loren-
zo Ramírez Reyes, Luis Tarango González, Alfredo Estrada --
Hernández, Lidia Gardea de Estrada, Benita Carvajal Vda. de
Zuñiga, Ana Beltrán de Chavarria, Manuel Rodríguez Frescas,
Oscar Adame Celiz, Jovita Adame Celiz, Modesto Chávez Soto,
Carlos Terrazas Fernández, Isidra Meza de Rodríguez, Teresa
García Loya, Julian Márquez Marrufo, Sixto Irigoyen Loya,-
Manuela Ortiz de Irigoyen, Juliana Flores de Almodovar, Ma-
nuel Loya Ortiz, Adela Durán de Valenzuela, Marcos Prieto.-
Saenz, Alejandro Bonilla Villado, Dolores Mendoza de Arzaga,
Carlota Loya de Romero, Pedro Fernández Mendoza, Jesús Gra-
nillo Estrada, Josefa Portillo de Estrada, Candelario Ron--
quillo Molina, María Ruíz de Márquez, Manuel y Bertha Ali--
cia Sigala, Guillermo Salas Arana, Jesús Elías Márquez Gra-
nillo, José Dolores Hernández Caballero, Julia Mendoza de -
Lera, Rosario Castelo Vda. de Rodríguez, José Luis Chávez.-
Terrazas, Amparo Carrasco de Ramos, Eusebio López Angulo, -



Francisco C. Estrada Chacón, Victor Manuel Gutiérrez Santillan, Guillermo Machado Martínez, Samuel Padilla Aguilar, - José Escalera Jiménez y Juventino Balderrama Montez, contra los actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador de la misma entidad y Recaudador de Rentas del Estado, consistentes en la expedición, promulgación, aplicación y ejecución del decreto mencionado en el punto anterior.

Vo.Bo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución -- vuelvan los autos al Juzgado de su origen; en su oportunidad archívese el Toca.

COTEJO:

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno por unanimidad de diecisiete votos de los señores Ministros Guerrero López, Rebolledo, Jiménez Castro, Rivera Silva, Burguete, Huitrón, Saracho Alvarez, Martínez-Ulloa, Iñárritu, Solís López, Canedo, Salmorán de Tamayo, - Yáñez, Guerrero Martínez, Mondragón Guerra, Aguilar Alvarez y Presidente en funciones, Ramírez Vázquez.- Fué ponente el C. Ministro Rebolledo.- Firman los CC. Presidente y Ministros que intervinieron con el C. Secretario General de Acuerdos que da fe.

PRESIDENTE EN FUNCIONES.

MARIANO RAMIREZ VAZQUEZ

EUQUERIO GUERRERO LOPEZ

MARIO G. REBOLLEDO

Amp. en Rev. 7319/67

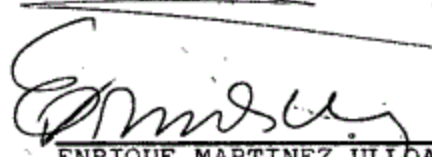

ALBERTO JIMENEZ CASTRO


MANUEL RIVERA SILVA


EZEQUIEL BURGUETE FARRERA


ABEL HUITRON Y AGUADO



JORGE SARACHO ALVAREZ


ENRIQUE MARTINEZ ULLOA


JORGE INARRITU


ERNESTO SOLIS LOPEZ


RAMON CANEDO ALDRETE


MA. CRISTINA SALMORAN
DE TAMAYO


MANUEL YANEZ RUIZ


PEDRO GUERRERO MARTINEZ


SALVADOR MONDRAGON GUERRA


ERNESTO AGUILAR ALVAREZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.


RAUL CUEVAS M.

"En 8 MAR. 1972 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior a los interesados y al Ministerio Público Federal,



47
ASUNTO: - Se remite testimonio de la resolución dictada en el toca 7319/67 así como los autos del juicio de -- amparo promovido por **Lino Flores Heraz y coags.**

PRIMERA

5533

AL C.

JUEZ PRIMERO DE DISTRITO.
CHIHUAHUA, CHIH.

Toca # 7319/67

Amp. # 216/67

En 140 fojas útiles, devuelvo a Ud., los autos del juicio de amparo promovido por **Lino Flores Heraz y coagraviado,**

"A.C. DE JUAREZ"

contra actos de 1 Congreso del Estado y otras autoridades,

CON 6 ANEXOS. remitiendole a la vez en 14 fojas también útiles un testimonio de la resolución dictada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, - en el Toca respectivo que fué tramitado por la Sección Primera de Trámite con el número 7319/67.

1 testimonio.
1 cuaderno.
4 copias.

U
Sírvasse Ud., acusar recibo y mandar hacer las-- notificaciones legales con 4 copias que se acompañan, de acuerdo con lo que dispone la fracción I del -- artículo 29 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que, - en su caso, se cumpla con lo que disponen los artículos 104 y 105 del mismo Ordenamiento.

M
Le reitero mi atenta consideración.

México, D.F., a 22 de julio de 1972.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS,

RAUL CUEVAS MONTESIN.

JGT/mm.v.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

"AÑO DE JUAREZ".

V. 98/972.

México, Distrito Federal, a catorce de-
febrero de mil novecientos setenta y dos.

Visto el escrito del señor licenciado -
Luis Octagi

